



Nit. 891.190.246-1

AUTO DE IMPUTACIÓN MIXTA No. 001
DENTRO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL ORDINARIO DE No. 1148

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO:

PRESUNTOS RESPONSABLES	RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURTH C.C. 17.691.533 HERIBERTO ARCILA PUENTES C.C. 6.681.291
ENTIDAD AFECTADA	MUNICIPIO DE EL PAUJIL
PRESUNTO DETRIMENTO	\$96.032.548 (Noventa y Seis Millones Treinta y Dos Mil Quinientos Cuarenta y Ocho Pesos)
POLIZA No.	930-73-994000000032
ASEGURADORA	Compañía de Seguros Solidaria de Colombia

En la ciudad de Florencia, Caquetá a los veintiséis (26) días del mes de febrero de dos mil veinticuatro (2024), la suscrita Directora Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Caquetá, en ejercicio de la competencia establecida en la Resolución 024 del 15 de febrero del 2011, procede a dictar **AUTO DE IMPUTACIÓN MIXTA DE RESPONSABILIDAD FISCAL DENTRO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL ORDINARIO DE UNICA INSTANCIA No. 1148**, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 610 de 2000, y la Ley 1474 de 2011, basado en los siguientes:

1. ANTECEDENTES

Originó la presente investigación el memorando CF- 066 del 05 de abril de 2016, por medio del cual la Dirección Técnica de Control Fiscal Integral, remite la denuncia D-003-16, relacionada con presuntas irregularidades relacionadas con el sobrecosto en la compra de un lote para los desplazados en el Municipio de El Paujil.

De acuerdo con el traslado de la denuncia D-003-16, se estableció que el Municipio de El Paujil suscribió el Contrato de Compraventa No. 001 del 26 de diciembre de 2013, con el señor Heriberto Arcila puentes, en cuantía de Doscientos cuarenta Millones de pesos (\$240.000.000) M/Cte., con el objeto de adquirir un predio con destino a la construcción del proyecto de vivienda en beneficio de la población vulnerable del citado ente territorial, el cual fue adquirido presuntamente con sobrecosto en cuantía de **NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$96.032.548) M/CTE.**

2. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Soportan el inicio de esta investigación fiscal las siguientes normas:

- Artículos 209, 267 y 268 numeral 5 de la Constitución Política.
- Ley 610 de 2000, Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las Contralorías.
- Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
- Ley 80 de 1993.

3. ENTIDAD ESTATAL AFECTADA

Municipio de El Paujil NIT: 800.095.763-0.

4. PRESUNTOS RESPONSABLES

RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURTH, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.691.533, expedida en Florencia, Caquetá; quien se desempeñó para época de ocurrencia de los hechos como Alcalde del Municipio de El Paujil, Caquetá; de acuerdo con el Acta de posesión No. 008 del 31 de diciembre de 2011 (folio 204).

HERIBERTO ARCILA PUENTES, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.681.291, expedida en El Paujil, Caquetá; quien se desempeñó para la época de los hechos como Contratista (vendedor) del Municipio de El Paujil, Caquetá.

5. CUANTÍA

Fue determinado un presunto detrimento por la suma de **NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$96.032.548) M/CTE.**

6. ACTUACIONES PROCESALES

1. Auto de Apertura No. 025 de fecha 18 de diciembre de 2018, por medio del cual se aperturó el Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 1148 (folio 228 al 233 y reversos).
2. Comunicación de vinculación al tercero civilmente responsable del Auto de Apertura No. 025 de fecha 18 de diciembre de 2018 (folio 234).
3. Notificación por aviso al investigado Rodrigo Andrés castro Betancourt (folio 241).
4. Notificación Auto de Apertura No. 025 de fecha 18 de diciembre de 2018, por aviso al señor Rodrigo Andrés Castro Betancourt (folio 242).



Nit. 891.190.246-1

5. Notificación Auto de Apertura No. 025 de fecha 18 de diciembre de 2018, por aviso al señor Heriberto Arcila Puentes (folio 242).
6. Auto de fecha 13 de mayo de 2019, por medio del cual se avoca conocimiento y se asigna sustanciación del proceso (folio 243 y reverso).
7. Auto No. 034 de fecha 30 de septiembre de 2019, por medio del cual se ordena designar apoderado de oficio (folio 244 al 246).
8. Constancia secretarial de estado No. 075 de fecha 01 de octubre (folio 247).
9. Diligencia de posesión defensor de oficio del estudiante de Derecho Darwin Alexander Plazas Varón en representación del investigado Rodrigo Andrés Castro Betancourt (folio 249).
10. Diligencia de posesión defensor de oficio del estudiante Fitzgerald Noreña Acevedo en representación del investigado Heriberto Arcila Puentes (folio 251).
11. Auto de fecha 03 de diciembre de 2019, por medio del cual se avoca conocimiento y se asigna sustanciación (folio 255).
12. Auto de fecha 21 de febrero de 2020, por medio del cual se avoca conocimiento y se asigna sustanciación (folio 256).
13. Auto por medio del cual se suspenden los términos en los procesos de responsabilidad fiscal, procesos administrativos sancionatorios y procesos administrativos coactivos de la Contraloría Departamental del Caquetá (folio 257).
14. Constancia secretarial de estado (folio 258).
15. Auto por medio del cual se reanudan términos en los procesos de responsabilidad fiscal, procesos administrativos sancionatorios y procesos de jurisdicción coactiva de la Contraloría Departamental del, Caquetá (folio 259 y reverso).
16. Constancia secretarial de estado (folio 260).
17. Diligencia de posesión defensor de oficio de la estudiante de Derecho Stefanny Michelly Olarte Hernández como defensora de oficio del investigado Rodrigo Andrés Castro Betancourt en sustitución del estudiante de Derecho Darwin Alexander Plaza Varón (folio 262).
18. Auto de fecha 19 de enero de 2022, por medio del cual se avoca conocimiento y se designa sustanciación (folio 265 y reverso).
19. Auto de fecha 25 de abril de 2022, por medio del cual se avoca conocimiento y se asigna sustanciación (folio 268).
20. Diligencia de posesión defensor de oficio del estudiante de Derecho Jonh Edwin Ortiz Cuéllar como defensor de oficio del investigado Rodrigo Andrés Castro Betancourt, en sustitución de la estudiante de Derecho Stefanny Michell Olarte Hernández (folio 279).
21. Auto de fecha 01 de abril de 2023, por medio del cual se avoca conocimiento y se asigna sustanciación (folio 285).
22. Oficio PF-137 de fecha 26 de enero de 2024, mediante el cual se cita al investigado Rodrigo Andrés Castro Betancourt a rendir versión libre y espontánea para el día 02 de febrero de 2024 a las 2.30 pm (folio 288).



Nit. 891.190.246-1

23. Oficio PF-146 de fecha 30 de enero de 2024, mediante el cual se cita al investigado Heriberto Arcila Puentes a rendir versión libre y espontánea para el día 06 de febrero de 2024 a las 9.00 am (folio 290).
24. Rendición versión libre y espontánea del señor Heriberto Arcila Puentes (folio 291 al 292).

7. PRUEBAS

Se tienen como pruebas los siguientes documentos allegados en la denuncia D-003-16:

1. Oficio de fecha 10 de septiembre de 2014, por medio del cual se Autoriza al Alcalde de El Paujil, remite la siguiente información: (folio 3).
 - Acuerdo No. 011 del 22 de junio de 2012, por medio del cual se autoriza al Alcalde, Departamento del Caquetá, para adquirir un inmueble destinado al desarrollo de un proyecto de vivienda (folio 4 al 7).
 - Copia del Contrato de promesa de Compraventa No. 011 del 26 de diciembre de 2013, con su respectiva notificación al supervisor del Contrato (folio 8 al 11).
 - Copia del comprobante de pago No. 3783 del 30 de diciembre de 2013, por la suma de Doscientos Cuarenta Millones de Pesos (\$240.000.000) Mcte (folio 12).
2. Oficio No. 505.10.045-567 del 16 de octubre de 2014, suscrito por el Alcalde del Municipio de El Paujil, remite la siguiente información (folio 16).
 - CD con el esquema del Ordenamiento Territorial del Municipio de El Paujil (folio 16-A).
 - Copia de la escritura pública No. 1728 del 27 de septiembre de 2006 con la respectiva constancia de la matrícula inmobiliaria (17 al 22 y reversos).
 - Copia del informe de Avalúo de Predios y/o Mejoras Rurales, emitida por el Ingeniero Civil Fernando Gustavo Martínez Bravo (folio 25 al 33).
3. Oficio No. 7832014EEE3493-01 del 17 de octubre de 2014, suscrito por el Director Territorial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, a través del cual informa que no existen avalúos en el predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 420-88245 (folio 37).
4. Oficio No. 501.01.045.011 del 27 de enero de 2015, suscrito por el Alcalde del Municipio de El Paujil, remite la siguiente información (folio 40).
 - Copia de la escritura pública No. 3078 del 26 de diciembre de 2013 (folio 41 al 48).
 - Copia del certificado de libertad y tradición del bien identificado con la matrícula inmobiliaria No. 420-109661 a nombre del Municipio de El Paujil (folio 49 al 50).



Nit. 891.190.246-1

5. Oficio de fecha 20 de enero de 2015, suscrito por la Directora encargada del banco Agrario e Colombia (folio 52).
6. Oficio No. 7832015EE1617-01 de fecha 29 de mayo de 2015, suscrito por el Director Territorial Encargado del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, a través del cual informa que no cuentan con el personal idóneo ni los recursos para realizar avalúos comerciales (folio 54 al 55).
7. Oficio No. 78320015EE1617-01 de fecha 29 de mayo de 2015, traslado a la sede central el IGAC para que realice el estudio y envíe personal para que apoye requerimientos (folio 56).
8. Oficio 800201EE13732-01 de fecha 14 de diciembre de 2015, suscrito por el Coordinador GIT Avalúos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, a través del cual solicita información para realizar un avalúo (61).
9. Oficio No. 8002015EE14620-01 de fecha 30 de diciembre de 2015, suscrito por el Coordinador GIT Avalúos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, a través del cual allega el avalúo del bien inmueble identificado con matrícula catastral No. 00-01-0003-0004-000 (folio 63 al 97).
10. Acta de visita especial de fecha 29 de diciembre de 2015 (folio 98 al 101).
11. Oficio No. 505.10.045-083 del 07 de marzo de 2016, suscrito por el Secretario de Gobierno del Municipio de El Paujil, remite la siguiente información (folio 105).
 - Certificación laboral del señor Rodrigo Andrés Castro Bethancourt (folio 106).
 - Certificación laboral del señor José Daime Sánchez Torres (folio 107).
 - Copia de la póliza de Seguro de Vida de Grupo No. 994000000887 expedida por la Aseguradora Solidaria de Colombia (folio 108 al 110).
 - Copia de la póliza de seguro de responsabilidad Civil Servidores Públicos No. 560-87-994000000011 expedida por la Aseguradora Solidaria de Colombia (folios 111 al 114 y 149 al 151).
 - Copia de la póliza de Seguros Multirriesgos No. 560-73-9940000000499 expedida por la Aseguradora Solidaria de Colombia (folio 115 al 148).
 - Copia póliza de Seguro Multirriesgo No. 630-40-9940000000032 expedida por la Aseguradora de Colombia (folio 152 al 162).
 - Copia de la póliza de Seguro de Automotores No. 630-40-9940000000090 expedida por la Aseguradora Solidaria de Colombia (folio 263 al 165).
 - Copia de la póliza de seguro de responsabilidad Civil Servidores Públicos No. 630-87-994000000004 expedida por la Aseguradora Solidaria de Colombia (folio 166 al 167).
 - Copia de la póliza de Responsabilidad Civil No. 1002603 expedida por la Compañía Aseguradora La Previsora S.A. (folio 168 al 179 y 197 al 199).
 - Copia de la póliza de Seguro de Vida de Grupos Póliza Normal 10011765 expedida por la Compañía Aseguradora La Previsora S.A. (folio 180).



Nit. 891.190.246-1

- Copia de la póliza de Seguros Multirriesgo No. 1000081 expedida por la Compañía Aseguradora La Previsora S.A. (folio 181 al 196)..
- Certificación de la menor cuantía para contratar por parte del Municipio de El Paujil para la vigencia 2013 (folio 200).
- Copia del Decreto No. 165 del 19 de diciembre de 2013, por medio del cual se hace un nombramiento (folio 201).
- Copia del Acta de posesión No. 65 del 19 de diciembre de 2019 (folio 202).
- Copia de la escarapela expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil (folio 203).
- Copia del Acta de posesión de fecha 31 de diciembre de 2011 del señor Rodrigo Andrés Castro Betancourt (folio 204).

8. DILIGENCIA DE VERSIÓN LIBRE Y ESPONTÁNEA

Luego de haber citados a la rendición de la versión libre y espontánea a los investigados, únicamente compareció el investigado Heriberto Arcila Puentes el día seis (06) de febrero de 2024, en la cual manifestó:

*"En Florencia, Caquetá, a los seis (06) días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro (2024), siendo las 9:15 a.m. se hizo presente el señor Heriberto Arcila Puentes, identificado en el encabezamiento, de 78 años de edad, con el fin de que se procediera a realizar diligencia de versión libre y espontánea en relación con los hechos materia investigación que cursa en este Ente de Control mediante **Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 1148**, aperturado el 18 de diciembre de 2018. En consecuencia, el Profesional Universitario de la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal hace saber que tiene derecho de ser asistido por un Abogado el cual manifiesta que no. Una vez que se dio cumplimiento a la defensa, se dejó libre de todo apremio y sin juramento al declarante, exhortándole a que diga la verdad a las preguntas que se le formulen, previniéndole acerca del contenido del artículo 33 de la Constitución Política. **PREGUNTADO:** Autoriza al Profesional Universitario a efectuarle preguntas **CONTESTO:** Si. **PREGUNTADO:** Sobre sus generales de Ley **CONTESTO:** Me llamo como quedó anotado en el encabezamiento, estado civil soltero, profesión independiente, dirección residencial centro municipio de El Paujil, Tel: 3228395963. Email. luiscarcila2424@gmail.com, me encuentro actualmente laborando como independiente **PREGUNTADO:** Desea ser notificado de las decisiones que tome este ente de control a través de correo electrónico **CONTESTO:** Si. **PREGUNTADO:** Sabe por qué ha sido llamado a versionar. **CONTESTO:** Si **PREGUNTADO:** En qué fecha usted realizó la venta del lote con destino a la construcción de vivienda en el Municipio de El Paujil **CONTESTO:** no recuerdo. **PREGUNTADO:** Se pone de presente el Auto de*



Nit. 891.190.246-1

Apertura No. 025 de fecha 18 de diciembre de 2018, obrante a folios 228 al 233, que tiene que decir sobre lo aquí investigado? **CONTESTADO:** En el año 2013, el alcalde me compró 6 hectáreas por \$240.000.000, me dijo que el municipio pagaba todos los gastos de la escritura, entonces cuando ya se cerró el negocio, dijo que el municipio que no pagaba nada y debía hacerlo yo, cosa que yo hice alrededor de \$10.000.000, entonces me tocó pagar todo a mi, a los pocos días me dio la plata, sacándome el iva y otros gastos. **PREGUNTADO:** como determinaron el precio de venta del lote en mención. **CONTESTO:** Recuerdo que yo le pedí más, pero no recuerdo cuanto, él me ofreció esa plata y por esa plata le vendí, este negocio lo hicimos en la casa de él. **PREGUNTADO:** Quien realizó el estudio de avalúo **CONTESTO:** de eso no me acuerdo que sucedió, simplemente acordamos ese precio y eso me pagó. **PREGUNTADO:** Obra en el expediente avalúo realizado por un particular en cuantía de \$240.000.000 y otro que realizó el IGAC en cuantía de \$144.000.000 aproximadamente, usted tuvo conocimiento del avalúo que adelantó el particular. **CONTESTO:** Recuerdo que para la venta el alcalde me mencionó del IGAC., pero no recuerdo que me dijo de eso. **PREGUNTADO:** A su juicio considera que la venta del predio se realizó por el valor comercial. **CONTESTÓ:** No señor, eso fue muy barato, no recuerdo, pero yo le pedí como a \$50.000.000 por hectárea. **PREGUNTADO:** Ha sido usted llamado a declarar por estos hechos ante la Fiscalía o Procuraduría. **CONTESTO:** No señor. **PREGUNTADO:** Sírvase manifestar si tiene algo más que agregar, corregir, suprimir, o enmendar a la presente diligencia. **CONTESTADO:** No señor.

No siendo otro el objeto de la presente diligencia se termina después de leída y aprobada por los que en ella intervinieron, siendo las 9:40 a.m."

9. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Como primera medida, es indispensable señalar que en el **ejercicio del control fiscal** se hace necesaria la aplicación del régimen probatorio a fin de establecer la existencia de hechos que puedan generar detrimento patrimonial, que afecte los intereses estatales.

La Responsabilidad Fiscal que determinan las Contralorías, debe estar soportada en pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, a fin de garantizar el debido proceso y el derecho de defensa de los investigados, como derechos fundamentales consagrados en el **artículo 29 de la Constitución Política**.

La prueba es la **razón, argumento o elemento de convicción** que se saca del medio probatorio, para llevar el convencimiento al juez o investigador, sobre el acaecimiento de los hechos que se debaten en un proceso.

Para la recolección de las pruebas deben tenerse en cuenta los **principios** que rigen el aspecto probatorio y que se constituyen en los parámetros mínimos a tener en cuenta en la recolección e interpretación de las mismas.

Los principios de la prueba se refieren a los conceptos básicos que iluminan al operador en este caso, administrativo al momento de admitir, decretar, practicar y valorar los diversos tipos de pruebas que soportan el fallo. Estos principios son: **necesidad, unidad, comunidad, intermediación, publicidad, contradicción, evaluación, oportunidad, pertinencia, conducencia, igualdad, eficacia, equidad y el principio inquisitivo**, entre otros.

Apreciar la prueba *"es la actividad intelectual que lleva a cabo el juez para medir la fuerza probatoria de un medio de prueba"*. Por lo tanto, **fuerza o valor probatorio** es la aptitud que tiene un hecho (solo o en concurrencia con otros) para demostrar judicialmente otro hecho o para que el mismo hecho quede demostrado.

Para adoptar su decisión con fundamento en la prueba, es indispensable que el juez se considere convencido por ella, o, dicho de otra manera, que se encuentre en **estado de certeza** sobre los hechos que declara.

Una indebida valoración del acervo probatorio puede generar una nulidad, que será la falta de motivación como irregularidad sustancial por violación de las formas propias de cada juicio, consistente en este caso, en no fijar el alcance de las pruebas en las cuales se fundamenta el juicio de responsabilidad (tipicidad – antijuridicidad y culpabilidad).

En el trámite procesal es necesario **PROBAR**, es decir, aportar al proceso los motivos o razones, por los medios y procedimientos aceptados por la ley, para llevarle al juez el convencimiento o la certeza sobre los hechos y la responsabilidad de las personas.

Esta garantía constitucional implica: el derecho a buscar la prueba, el derecho a postular la prueba, el derecho a que se le decrete la prueba, el derecho a que se le practique la prueba, el derecho a que se le niegue la prueba, el derecho a que se le valore la prueba. La cual se puede definir como las razones, argumentos o elementos de convicción que se sacan del medio probatorio, para llevar al convencimiento del Juez o Instructor, sobre el acaecimiento de los hechos que se debaten en el proceso.

La **carga probatoria** es una facultad discrecional de ofrecer y solicitar pruebas y de intervenir en su práctica. Para que los hechos, cosas y actos que se plantean en el proceso estén debidamente probados, se recurre a la práctica de pruebas. **En materia de responsabilidad**

fiscal le corresponde al Estado, en cabeza del órgano de control fiscal correspondiente, probar los hechos investigados.

La Prueba ha sido definida como: *"Todo lo que sirve para darnos la certeza acerca de la verdad de una proposición. La Certeza está en nosotros, la verdad en los hechos. Aquella nace cuando uno cree que conoce ésta; más por la facilidad humana, puede haber certeza donde haya verdad y viceversa"*. Es necesario llevar a cabo las acciones tendientes a obtener la finalidad procesal de la prueba, siendo ésta *"la de producir la certeza sobre la existencia o inexistencia del elemento típico de la responsabilidad (gestión fiscal) y los estructurales de la misma"*, a través de los diferentes medios de prueba.

Los conceptos de **conducencia y pertinencia** son conceptos diversos; mientras el primero alude a la idoneidad de la prueba para demostrar lo que se pretende probar, el concepto de pertinencia cubre la relación lógica entre el medio de prueba y lo que se pretende probar, o la relación que el hecho por probar puede tener con el litigio o la materia del proceso.

Al momento de llevar a cabo un análisis jurídico-fiscal en los hechos materia de investigación, el mismo se debe realizar de manera integral, apreciando cada una de las pruebas que reposan en el plenario, tanto las documentales, testimoniales, periciales o cualquier otro medio probatorio que se haya practicado dentro de los parámetros establecidos por nuestro ordenamiento jurídico.

Conforme lo anterior, la prueba tiene tres aspectos a saber: a) Su manifestación formal, es decir, los medios utilizados para llevarle al juez el conocimiento de los hechos, como testimonios, documentos, indicios, etc. b) Su contenido sustancial o esencial, es decir, las razones o motivos que de esos medios se deducen a favor de la existencia o inexistencia de los hechos. c) Su resultado subjetivo o el convencimiento, que con las razones o motivos, se trata de producir en la mente del juzgador y en este sentido podrá concluir si hay o no prueba de determinados hechos.

Lo expuesto, se encuentra fundamentado en lo normado por el **artículo 26 de la Ley 610 de 2000** que determina: *"APRECIACIÓN INTEGRAL DE LAS PRUEBAS. Las pruebas deberán apreciarse en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica y la persuasión racional"*.

El acervo probatorio contenido en las presentes diligencias conlleva a determinar responsabilidad fiscal en cabeza de los implicados, pues están dados los elementos contentivos de ella, los cuales se encuentran claramente definidos en el artículo 5 de la Ley 610 de 2000, el cual precisa:

- *"Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal.*
- *Un daño patrimonial al Estado.*



Nit. 891.190.246-1

- Un nexa causal entre los dos elementos anteriores."

En consideración, la Constitución Política de 1991 reconoce expresamente la función de control fiscal, como una actividad independiente y autónoma, diferenciada de la que corresponde a las clásicas funciones estatales, lo cual obedece no sólo a un criterio de división y especialización de las tareas públicas, sino a la necesidad político-jurídica de controlar, vigilar y asegurar la correcta utilización, inversión y disposición de los fondos y bienes públicos que pertenecen a la Nación.

Ahora bien, con relación al daño, el artículo 6 de la Ley 610 de 2000 preceptúa:

"Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías.

Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público."

El elemento más relevante es el daño, en consecuencia, no hay responsabilidad fiscal sin daño, es decir, cuando **no existe o no es cuantificable**, y éste debe ser atribuido a título de dolo o culpa grave, debiendo existir una relación de causalidad entre la conducta y el hecho generador del daño.

El daño patrimonial al Estado es un fenómeno de carácter estrictamente pecuniario o económico, que consiste en la pérdida de recursos por parte del Estado, es decir, es el empobrecimiento del erario. De esta forma, dentro de la tipología de los perjuicios podemos establecer que el daño patrimonial al Estado es un perjuicio material quedando excluida la posibilidad de que exista un perjuicio inmaterial. Dicho daño puede ser ocasionado por los servidores públicos o los particulares que causen un daño una lesión a los bienes y recursos públicos en forma directa, o contribuyendo a su realización.

Como se podrá notar, el legislador define el "daño" con el sinónimo "lesión", cuyo significado prácticamente reúne los de los sustantivos abstractos que luego relaciona para indicar, de manera a nuestro modo de ver reiterada, las formas en las que puede materializarse esa lesión.

Llama la atención igualmente, el hecho de que el daño o lesión puede ser ocasionado por una "gestión fiscal antieconómica", pues según el diccionario de la lengua española, "antieconómico" es lo contrario a la economía, aquello que es muy costoso, y, "economía", la administración de los ingresos y gastos del modo más provechoso, el ahorro de dinero, la reducción de gastos.

Desde un punto de vista general y abstracto, le puede causar un posible daño al patrimonio del Estado configurado por circunstancias tales como, el dinero que se dejó de ahorrar, el no haber reducido los gastos y el no haber acogido la opción más provechosa en la inversión realizada.

Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia SU-620 del 13 de noviembre de 1996, expediente T-84714, Magistrado Ponente Antonio Barrera Carbonell, expresa:

"Para la estimación del daño debe acudir a las reglas generales aplicables en materia de responsabilidad; por lo tanto, entre otros factores que han de valorarse, debe considerarse que aquél ha de ser cierto, especial, anormal y cuantificable con arreglo a su real magnitud. En el proceso de determinación del monto del daño, por consiguiente, ha de establecerse no sólo la dimensión de éste, sino que debe examinarse también si eventualmente, a pesar de la gestión fiscal irregular, la administración obtuvo o no algún beneficio".

El daño al patrimonio público puede tener diversos orígenes, según lo concluyó la Corte constitucional en Sentencia C-840 del 9 de agosto de 2001, Expediente D-3389, Magistrado Ponente Jaime Araujo Rentería el siguiente texto:

"...los daños al patrimonio del Estado pueden provenir de múltiples fuentes y circunstancias, dentro de las cuales la irregularidad en el ejercicio de la gestión fiscal es apenas una entre tantas. De suerte que el daño patrimonial al Estado es susceptible de producirse a partir de la conducta de los servidores públicos y de los particulares, tanto en el área de la gestión fiscal como fuera de ella. Así, por ejemplo, el daño patrimonial estatal podría surgir con ocasión de una ejecución presupuestal ilegal, por la pérdida de unos equipos de computación, por la indebida apropiación de unos flujos de caja, por la ruptura arbitrariamente provocada en las bases de un edificio del Estado, por el derribamiento culposo de un semáforo en el tráfico vehicular, y por tantas otras causas que no siempre encuentran asiento en la gestión fiscal. Siendo patente además que, para efectos de la mera configuración del daño patrimonial al Estado, ninguna trascendencia tiene el que los respectivos haberes formen parte de los bienes fiscales o de uso público, o que se hallen dentro o fuera del presupuesto público aprobado para la correspondiente vigencia fiscal".

En efecto tenemos que las pruebas aportadas, se ciñen a los principios de conducencia, pertinencia y necesidad y se valoraran de conformidad con la regla de la sana crítica y se apreciaran en forma racional y en aplicación de los principios que rigen la acción fiscal y la función administrativa, siguiendo los parámetros fijados por nuestra Carta Política en sus artículos 29 y 209, la Ley 610 de 2000, la Ley 1474 de 2011, modificada por el Decreto 403 de 2020, la Ley 80 de 1993 y las demás normas concordantes con el objetivo de establecer la verdad de estos hechos con aplicación de análisis objetivos, prudentes y veraces.

Así las cosas, resulta importante para esta Dirección Técnica analizar la existencia del daño patrimonial al Estado como elemento principal que comporta el ejercicio de la acción fiscal, de conformidad con el material probatorio obrante en el expediente y relacionadas con los hechos que dieran origen al correspondiente trámite de la Denuncia D-003-16, no sin antes advertir que dichas pruebas fueron recaudadas en forma legal y son las que esencialmente se tuvieron como soporte probatorio en el Auto de Apertura. Denuncia presentada ante este Ente de Control el día 21 de agosto de 2014, a través de escrito anónimo obrante a folio 1.

Evidencia el Despacho que en la fecha 10 de mayo de 2013, a petición de la Alcaldía del Municipio de El Paujil, Caquetá; el señor Fernando Gustavo Martínez Bravo presenta Informe de Avalúos de Predios y/o Mejoras Rurales, respecto del bien inmueble rural ubicado en el Municipio de El Paujil, identificado con la Matrícula inmobiliaria No. 440-88285 y ficha catastral No. 00-01-000031-0004-000, en el cual se determinó valor comercial establecido en la cuantía de DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$240.000.000) M/CTE., (folio 25 al 349 advirtiéndose que el señor evaluador acredita certificado de la Corporación Colombiana de Lonjas y Registros "CORPOLONJAS DE COLOMBIA", lo cual lo acredita como Perito Evaluador Profesional otorgándole Registro- Matrícula No. R.N.A/C.C-25-1885, que respalda esta determinación con vigencia hasta el día 31 de julio de 2012, "lo cual lo faculta para avalar, respaldar y firmar avalúos comerciales en general a nivel Nacional." Certificado expedido en la ciudad de Bogotá D.C., a los 09 días del mes de agosto de 2010.

En desarrollo del trámite de la Denuncia No. D-003-16, a través de la Dirección Técnica de Control Fiscal Integral se desarrollaron múltiples comunicaciones con el Municipio de El Paujil, Caquetá, en aras de lograr el cabal esclarecimientos de los hechos.

En la fecha 16 de marzo de 2015, mediante oficio CF-0791, la Directora Técnica de Control Fiscal Integral de este Ente de Control, solicita al Director Territorial Caquetá del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC., solicita la viabilidad de realizar el avalúo comercial del predio identificado catastralmente con el No. 00-01-0003-0004-000 y matrícula inmobiliaria 420-88285, ubicado en la vereda El Borugo del Municipio de El Paujil, Caquetá. Y de igual manera se solicitó certificar el valor del avalúo catastral realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi para la vigencia 2013 de los predios bajo las fichas catastrales No. 001-01.0003-0004-



Nit. 891.190.246-1

000 y 01-01-0003-0004-000 ubicados en la vereda El Borugo del Municipio de El Paujil, Caquetá y de ser necesario remitir copia de las fichas catastrales de los mencionados predios.

Mediante oficio No. 8002015EE14620-01 de fecha 14 de diciembre de 2015, la Coordinadora GIT Avalúos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi Bogotá envió el avalúo comercial del predio rural denominado Lote No. 1, ubicado en la vereda Moravia del Municipio de El Paujil, Caquetá, identificado con cédula catastral No. 00-01-0003-0004-000, el cual fue practicado conforme a las normas y procedimientos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, estableció un avalúo comercial establecido en la cuantía de **CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS (\$143.967.452) M/CTE.** (folio 63 al 82).

Evidencia este Despacho que a través de la escritura pública No. 3078 de fecha 26 de diciembre de 2013 (folio 88 al 97), se materializa el negocio jurídico de compraventa de un lote denominado LOTE NÚMERO UNO ubicado en la vereda El Borugo con extensión de seis (6) hectáreas por valor de DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$240.000.000) M/CTE., bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 420-109661 y matrícula inmobiliaria No. 00-01-0003-0004-000, establecido en la promesa de compraventa No. 001 de fecha 26 de diciembre de 2013, consistente en la compraventa del mencionado terreno (8 al 11), pago que se realizó mediante comprobante de pago No. 3783 de fecha 30 de diciembre de 2013, por valor de DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$240.000.000) M/CTE. (folio 12).

La Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal determina que el presunto detrimento patrimonial se establece en la cuantía de **NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$96.032.548) M/CTE.**, como lo expresó la Conclusión de la Denuncia D-003-16, toda vez que es el resultado cuantificado de la confrontación entre los avalúos realizados por el particular Fernando Gustavo Martínez a quien acudió el Municipio de El Paujil y el solicitado por la Contraloría Departamental del Caquetá ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

En cuanto a las normas que regulan la compra y enajenación de bienes inmuebles para las entidades estatales encontramos:

La Ley 9 de 1989, *"Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones"*, en su artículo 15 establece:



Nit. 891.190.246-1

"Artículo 15°.- El precio máximo de adquisición será el fijado por el Instituto "Agustín Codazzi" o por la entidad que cumpla sus funciones, de conformidad con el artículo 18 de la presente Ley.

La forma de pago, en dinero efectivo, títulos-valores o bienes muebles e inmuebles, será convenida entre el propietario y el representante legal de la entidad adquirente. Las condiciones mínimas del pago del precio serán las previstas en el artículo 29.

Si quedare un saldo del precio pendiente de pago al momento de otorgar la escritura pública de compraventa, la entidad adquirente deberá entregar simultáneamente una garantía bancaria incondicional de pago del mismo. La existencia del saldo pendiente no dará acción de resolución de contrato, sin perjuicio del cobro del saldo por la vía ejecutiva.

Facúltese a los establecimientos bancarios para emitir las garantías de que trata el inciso anterior." (Subrayado fuera de texto).

Artículo 2°. El artículo 15 del Decreto 855 de 1994 quedará así:

"Artículo 15. Avalúo de bienes inmuebles. Para efectos de la venta o adquisición de bienes inmuebles, los avalúos que deban realizar las entidades públicas o que se realicen en actuaciones administrativas, podrán ser adelantados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o por cualquier persona natural o jurídica de carácter privado, que se encuentre registrada y autorizada por la lonja de propiedad raíz del lugar donde esté ubicado el bien para adelantar dichos avalúos.

Parágrafo. Si la entidad pública escoge la opción privada, corresponderá a la Lonja determinar, en cada caso, la persona natural o jurídica que adelante el avalúo de bienes inmuebles". (Subrayado fuera de texto).

Al respecto evidencia este Despacho, que no obra solicitud a la Lonja de propiedad raíz donde se encuentra ubicado el bien inmueble y además el certificado presentado por el Evaluador del bien inmueble el señor Fernando Gustavo Martínez Bravo, que lo acredita como tal (folio 35), tiene una vigencia hasta el 31 de julio de 2012, siendo expedido el informe del avalúo en la fecha 10 de mayo de 2012.

Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso advertir que tal como lo adujo el trámite de la Conclusión de la Denuncia D-003-16, evidencia este Despacho que no se requirió por parte del Municipio de El Paujil el avalúo del respetivo bien inmueble objeto de compra al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, sino al particular facultado por la norma para la expedición del avalúo comercial del bien inmueble en comento, presentándose un avalúo muy por encima del avalúo determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, quien es la entidad estatal en



Nit. 891.190.246-1

orden de importancia autorizada por la ley para realizar AVALÚOS COMERCIALES en el país, generándose un presunto daño patrimonial al Municipio De El Paujil en la cuantía de **NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$96.032.548) M/CTE.**

En este sentido, es preciso indicar que el presente proceso tiene su origen en la Conclusión trámite de la denuncia D-003-16 de fecha 17 de marzo de 2016, relacionado con presuntas irregularidades ocasionadas por la compra del bien inmueble Lote No. 1, ubicado en el Municipio de El Paujil, Caquetá; el cual consta de seis (69 hectáreas, identificado con matrícula inmobiliaria No. 420-109661 del Círculo Notarial de Florencia, Caquetá; el cual fue adquirido por el representante legal del Municipio de El Paujil, al realizarle la compra al señor Heriberto Arcila Puentes, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.681.291.

La investigación de carácter fiscal, realizada por la Contraloría Departamental del Caquetá recolectó las pruebas suficientes, representadas en la Conclusión de la Denuncia D-00-16, para determinar que de acuerdo con lo prescrito por la Ley 610 del 2000 en su artículo 6 estableció: **"DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías.**

Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público", se vislumbra que existe un presunto detrimento patrimonial en contra del municipio de El Paujil, Caquetá.

En este sentido, evidencia este Despacho que el mencionado Auto de Apertura No. 025 de fecha 18 de abril de 2018, determinó que el presunto daño al Estado correspondía a la suma de **NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$96.032.548) M/CTE.**, presunto detrimento que este Despacho constata mediante la diferencia establecida entre los avalúos determinados por el Instituto Agustín Codazzi y el avalúo Fernando Gustavo Martínez Bravo, conforme al comprobante de pago No. 3783 de fecha 30 de diciembre de 2013, por valor de **DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$240.000.000) M/CTE.**, valor comercial determinado por el evaluador, mientras que el avalúo comercial determinado por el Instituto Agustín Codazzi para la misma fecha se estableció en **CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS (\$143.967.452) M/CTE.**

Se vislumbra la falta en que incurrió el señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**, quien se desempeñó como Alcalde del Municipio de El Paujil, Caquetá; para la época de ocurrencia de los hechos, quien ostentó la calidad de gestor fiscal en su calidad de Alcalde y es quien suscribe la promesa de compraventa del bien inmueble Lote No. 1, identificado con matrícula inmobiliaria No. 420-109661, y que posteriormente fue consolidado el negocio jurídico de compraventa a través de la escritura pública No. 3078 de fecha 26 de diciembre de 2013, actuando en su condición de representación legal del Municipio de El Paujil, Caquetá-comprador.

Respecto al señor **HERIBERTO ARCILA PUENTES**, quien actuó en su condición de vendedor del bien inmueble Lote No. 1, identificado con matrícula inmobiliaria No. 420-109661, al Municipio de El Paujil, Caquetá; es claro para este Despacho que desborda sus alcances de responsabilidades como gestor fiscal, toda vez que quien adelantó las acciones conducentes para la determinación del avalúo comercial del bien inmueble tantas veces mencionado fue el señor Alcalde para la época de los hechos, y el señor Arcila Puentes no fue receptor de anticipos y por tanto no comportó la condición de gestor fiscal y en consecuencia no habrá lugar a imputar responsabilidad alguna.

En conclusión, mal haría este Despacho en endilgar responsabilidad por este hecho en contra del procesado que fungió en calidad de vendedor del bien inmueble, esto es el señor Heriberto Arcila Puentes, por la que la decisión que adoptará este Despacho no podrá ser otra que archivar para quien fungió en su calidad del vendedor del bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 420-109661, según contrato de compraventa No. 001 del 26 de diciembre de 2013 (folio 8 al 11), respecto del sobrecosto en la compra del mencionado bien inmueble. Toda vez que el señor Arcila Puentes no ostentó la calidad de gestor fiscal, es decir no tuvo la habilitación legal, administrativa con capacidad decisoria frente a los recursos, bienes o intereses patrimoniales bajo la administración o manejo de recursos, por consiguiente, al no asumir tales responsabilidades no participa ni contribuyó a la realización del presente sobrecosto. Contrario sensu el señor Rodrigo Andrés Castro Betancourt en su calidad de Alcalde, si ostentó la calidad de gestor fiscal, contribuyendo y ocasionando el detrimento patrimonial en cuantía de **NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$96.032.548) M/CTE.**

Es necesario traer a colación lo señalado en los artículos 26 y 51 de la referida ley 80 de 1993, que a su tenor literal establecen:

Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio:

1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.

2o. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas.

3o. Las entidades y los servidores públicos responderán cuando hubieren abierto licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente los correspondientes pliegos de condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de condiciones o términos de referencia hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por parte de aquellos.

La expresión "Concurso" y "Términos de referencia" fueron derogadas por el art. 32 de la Ley 1150 de 2007.

4o. Las actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las reglas sobre administración de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia.

5o. La responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual y la de los procesos de selección será del jefe o representante de la entidad estatal quien no podrá trasladarla a las juntas o consejos directivos de la entidad, ni a las corporaciones de elección popular, a los comités asesores, ni a los organismos de control y vigilancia de la misma.

6o. Los contratistas responderán cuando formulen propuestas en las que se fijen condiciones económicas y de contratación artificialmente bajas con el propósito de obtener la adjudicación del contrato.

7o. Los contratistas responderán por haber ocultado al contratar, inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones, o por haber suministrado información falsa.

8o. Los contratistas responderán y la entidad velará por la buena calidad del objeto contratado. (Subrayado fuera de texto).

Artículo 51º.- De la Responsabilidad de los Servidores Públicos. El servidor público responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la Constitución y de la ley.

Teniendo en cuenta los hechos configurados en el presente proceso, se materializa una gestión antieconómica e ineficiente en los términos prescritos en la Ley 610 de 2000, modificada parcialmente por el Decreto 403 de 2020. Lo que conlleva a establecer que las acciones desplegadas por los presuntos responsables violan flagrantemente el mandato constitucional del artículo 209 que establece:



Nit. 891.190.246-1

La Constitución Política de Colombia establece en su **Artículo 209**. *“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.”*

Teniendo en cuenta los hechos configurados en el presente proceso, se puede determinar que se materializa una gestión antieconómica e ineficiente en los términos prescritos en la Ley 610 de 2000.

Respecto del ejercicio de la Gestión fiscal, ha mencionado la Corte Constitucional en Sentencia C-840 de 2001:

“Como bien se aprecia, se trata de una definición que comprende las actividades, económicas, jurídicas y tecnológicas como universo posible para la acción de quienes tienen la competencia o capacidad para realizar uno o más de los verbos asociados al tráfico económico de los recursos y bienes públicos en orden a cumplir los fines esenciales del Estado conforme a unos principios que militan como basamento, prosecución y sentido teleológico de las respectivas atribuciones y facultades”.

Sobre el particular es menester indicar que la Responsabilidad Fiscal únicamente se puede pregonar respecto de los servidores públicos que estén jurídicamente habilitados para ejercer gestión fiscal, es decir que tengan poder decisorio sobre fondos o bienes del Estado puestos a su disposición, advirtiendo que esa especial responsabilidad está referida exclusivamente a los fondos o bienes públicos que hallándose bajo el radio de acción del titular de la gestión fiscal, sufran detrimento en la forma y condiciones prescritos por la Ley.

La Ley 610 de 2000 considera la afectación del patrimonio del Estado con fundamento en el artículo 6 de la Ley 610 de 2000, como:

“ARTÍCULO 6o. DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, **uso indebido** o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, **inequitativa** e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías.

Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público."

El artículo 1 de la Ley 610 de 2000, es enfático en establecer que mediante el proceso de responsabilidad fiscal se determina la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares cuando en el ejercicio de la gestión fiscal, o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado.

La jurisprudencia hace alusión que la gestión fiscal que comprende las actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, analizando la expresión con "Ocasión" define que la gestión fiscal es susceptible de operar como circunstancia u oportunidad para ejecutar o conseguir algo a costa de los recursos públicos, causando un daño al patrimonio estatal, evento en el cual la persona que se aproveche de tal situación, dolosa o culposamente, debe responder fiscalmente resarciendo los perjuicios que haya podido causar al erario.

En concordancia con lo anterior, aun cuando la presunta responsabilidad fiscal comprende a los directivos de las entidades y demás personas que manejen o administren recursos o fondos públicos, así como quienes desempeñen funciones de ordenación, control, dirección y coordinación; y a los contratistas y particulares que en ejercicio de alguna actividad generen perjuicio al patrimonio del Estado, este Despacho deberá endilgar responsabilidad fiscal en contra del investigado para el presente caso, en razón a que fungió en calidad de gestor fiscal y era quien tenía su disposición los bienes y recursos del Municipio de El Paujil y era el encargado de dar cumplimiento a los fines del Estado, preservar los recursos del Municipio y adquirir bienes y servicios a precios del mercado evitando presuntos sobre costos en la compra de los mismo.

De otra parte, en cuanto al daño antijurídico que surge del Contrato de Compraventa No. 001, suscrito entre el Municipio de El Paujil y el señor Heriberto Arcila Puentes, la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal, encuentra que revisado el acervo probatorio, puede determinarse que se generó un presunto daño al patrimonio del Estado, en cabeza del señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**, identificado con cédula de ciudadanía número 17.691.533, expedida en Florencia, Caquetá; quien para la fecha de la ocurrencia de los hechos se desempeñó como Alcalde del Municipio de El Paujil, toda vez que era la persona encargada de hacer el respectivo avalúo comercial del bien inmueble objeto de la compra por parte del Entidad Territorial, y dentro de sus funciones establecidas en el artículo 315 de la Constitución Política de Colombia numeral 9 se precisa:

"9. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto." Tal como se precisa su condición de Alcalde según acta de la Comisión Escrutadora Municipal en la cual se declara a Rodrigo Andrés Castro Betancourt como Alcalde del Municipio de El Paujil,



Nit. 891.190.246-1

Caquetá; para el período 2012-2015, Caquetá (folio 203) y acta de posesión No. 008 de 2011 de fecha 31 de diciembre de 2011; toda vez que ostentó la calidad de gestor fiscal descrita en el artículo 3 de la Ley 610 de 2000, que prescribe:

"(...) Gestión fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales (...)" (Negrillas por fuera del texto original).

Así las cosas, el señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**, incumplió con los deberes señalados por la Constitución y la Ley, respecto a ceñir sus actuaciones a la normatividad vigente, buscando un avalúo comercial que favoreciera las arcas de la Entidad Territorial que representaba.

De igual manera, se tiene que el objetivo principal o fin esencial de la Contraloría es determinar la existencia de la obligación reparadora por la conducta antijurídica de un agente público o de un particular, en el marco del circuito de la gestión fiscal, característica que se observa en el campo de acción laboral del implicado, por cuanto el universo fiscal dentro del cual transita como potencial destinatario, entre otros, los directivos y personas de las entidades que profieran decisiones determinantes de gestión fiscal, así como quienes desempeñen funciones de ordenación, control, dirección y coordinación, contratistas y particulares que causen perjuicios a los ingresos y bienes del Estado, siempre y cuando se sitúen dentro de la órbita de la gestión fiscal en razón de sus poderes y deberes fiscales.

Es decir, la gestión fiscal está ligada siempre a unos bienes o fondos estatales inequívocamente estipulados bajo la titularidad administrativa o dispositiva de un servidor público o de un particular, concretamente identificados.

Lo anterior se aprecia ampliamente en el hecho investigado, ya que la gestión fiscal le concede al servidor público o de manera excepcional al particular, por vía funcional o contractual, no solo la disposición material sobre el patrimonio público, sino esencialmente la disposición jurídica sobre el mismo. Es decir, la capacidad de disposición legítima y válida, acaeciendo naturalmente la posición de garante sobre tales bienes.

Entonces, podemos concluir, en primer lugar, que la gestión fiscal hace relación con las tareas funcionales concernientes a la administración DIRECTA del patrimonio público, administración que debe someterse al principio de legalidad, así como a los postulados de la función pública en general y de la función administrativa.

Dicha compra presenta presunto detrimento patrimonial al Municipio, toda vez que por parte del de la Administración vigente para la época de los hechos, no se buscó un avalúo comercial del bien inmueble que favoreciera los intereses de Municipio y preservara los recursos institucionales y optó por solicitar un avalúo privado (con persona presuntamente no facultado para hacerlo con certificación no vigente de avaluador folio 35), y no acudió a un avalúo comercial ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, por tanto prefirió realizarlo ante un evaluador privado, el cual presenta sobrevaloración del precio del valor comercial, además de que presuntamente para la época del avalúo no se encontraba certificado por Fedelonjas, según certificación obrante a folio 35.

En consecuencia, mal haría este Despacho en endilgar responsabilidad por este hecho en contra del investigado que fungió en calidad de vendedor del bien inmueble el señor HERIBERTO ARCILA PUENTES, por cuanto no se evidencia que con su actuar contribuyera al daño patrimonial y en consecuencia no se configurarían los elementos de la responsabilidad fiscal, por lo que la decisión que adoptará esta Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal respecto al hecho de la venta del bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 420-109661, será la de archivar, toda vez que no se evidencia el manejo de recursos por parte del vendedor antes de realizarse el negocio jurídico de compraventa en cuantía de **DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$240.000.000) M/CTE.**, por tanto se procederá al archivo de conformidad con el artículo 47 de la Ley 610 del 2000, para el vendedor, toda vez que no comportó la gestión fiscal:

"(...) Habrá lugar a proferir auto de archivo cuando se pruebe que el hecho no existió, que no es constitutivo de detrimento patrimonial o no comporta el ejercicio de gestión fiscal, se acredite el resarcimiento pleno del perjuicio o la operancia de una causal excluyente de responsabilidad o se demuestre que la acción no podía iniciarse o proseguirse por haber operado la caducidad o la prescripción de la misma.(...)"

Finalmente, advierte el Despacho que la totalidad del bien inmueble comprado por el Municipio de El Paujil, Caquetá; producto del Contrato de Compraventa No. 001 de fecha 26 de diciembre de 2013, se escrituró efectivamente al Ente Territorial, pero no fue adquirido a precios del mercado, presentándose un presunto sobrecosto en la compra del bien inmueble. Lo que permite concluir que se presenta un presunto detrimento al Municipio en cuantía de **NOVENTA**



Nit. 891.190.246-1

Y SEIS MILLONES TREINTE Y DOS QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$96.032.548) M/CTE.

Por lo tanto, este Despacho procederá a **IMPUTAR RESPONSABILIDAD FISCAL** en contra del señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**, identificado con cédula de ciudadanía número 17.681.291, expedida en Florencia, Caquetá, quien para la fecha de la ocurrencia de los hechos se desempeñó como Alcalde de El Paujil, Caquetá; de conformidad con la declaratoria de la Comisión Escrutadora Municipal de fecha 30 de octubre de 2011 (folio 203), el acta de posesión de fecha 31 de diciembre de 2011 obrante a folio 204, la promesa de compraventa No. 001, suscrita el día 26 de diciembre de 2013 (folio 8 al 10) y la ordenación del pago según comprobante de pago No. 3783 de fecha 30 de diciembre de 2013 (folio 12).

***"Auto de Imputación de Responsabilidad Fiscal.** El funcionario competente proferirá auto de imputación de responsabilidad fiscal cuando esté demostrado objetivamente el daño o detrimento al patrimonio económico del Estado y existan testimonios que ofrezcan serios motivos de credibilidad, indicios graves, documentos, peritación o cualquier medio probatorio que comprometa la responsabilidad fiscal de los implicados".*

Como primera medida es necesario identificar los elementos constitutivos de la responsabilidad fiscal, los cuales se encuentran consagrados en el artículo 5 de la Ley 610 de 2000, Artículo 125. Modificar el artículo 5 de la Ley 610 de 2000, el cual quedará así: La responsabilidad fiscal estará integrada por los siguientes elementos:

ARTÍCULO 5o. ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL. La responsabilidad fiscal estará integrada por los siguientes elementos:

- Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal.
- Un daño patrimonial al Estado.
- Un nexo causal entre los dos elementos anteriores.

En ese orden de ideas, en el marco constitucional colombiano, identificar la gestión fiscal conlleva establecer la administración o manejo de recursos públicos. Si no se establece previamente la naturaleza jurídica de los recursos no se puede intentar establecer si un sujeto público o privado se encuentra ante el ejercicio de gestión fiscal.

Respecto al tema de la calidad de gestores fiscales, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en radicado No. 848 de 1996 acerca del concepto de gestión fiscal expresó:

"(...) Gestión fiscal es, entonces, el conjunto de actividades económico jurídicas relacionadas con la adquisición, conservación, explotación, enajenación, consumo, o disposición de los bienes del Estado, así como la recaudación, manejo e inversión de

sus rentas en orden a cumplir los fines de éste y realizadas por los órganos o entidades de naturaleza jurídica pública o por personas naturales o jurídicas de carácter privado (...).

Igualmente, La Corte Constitucional en Sentencia C- 549 de 1993 señaló:

"(...) El concepto de gestión fiscal alude a la administración o manejo de tales bienes, en sus diferentes y sucesivas etapas de recaudo o percepción, conservación, adquisición, enajenación, gasto, inversión y disposición. Consiguientemente, la vigilancia de la gestión fiscal se endereza a establecer si las diferentes operaciones, transacciones y acciones jurídicas, financieras y materiales en las que se traduce la gestión fiscal se cumplieron de acuerdo con las normas prescritas por las autoridades competentes, los principios de contabilidad universalmente aceptados o señalados por el Contador General, los criterios de eficiencia y eficacia aplicables a las entidades que administran recursos públicos y, finalmente, los objetivos, planes, programas y proyectos que constituyen, en un período determinado, las metas y propósitos inmediatos de la administración (Ley 42 de 1993, artículos 8 a 13)".

Se presume entonces, que constituye Responsabilidad Fiscal una conducta **dolosa o gravemente culposa** atribuible a una persona que realiza gestión fiscal, un daño patrimonial al Estado y un nexo causal entre los dos elementos anteriores, los cuales se razonan en relación al implicado: **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETENCOURT**, identificado con cédula de ciudadanía número 17.691.533, expedida en Florencia, Caquetá; quien para la fecha de la ocurrencia de los hechos se desempeñó como Alcalde del Municipio de El Paujil, Caquetá.

La Constitución Política en su artículo 267, modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 4 de 2019, establece que dicho control se ejerce de manera posterior y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y principio que establezca la ley, con el fin de vigilar, determinar y establecer la responsabilidad de quienes realizan la Gestión Fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación.

Es entonces, que el erario siempre debe ser invertido buscando alcanzar el mayor beneficio o valor agregado para la buena y eficiente prestación del servicio a la comunidad regida a cargo de la Entidad Territorial y no un actuar irresponsable, liberado y sin medición de consecuencias financieras y presupuestales tal como se aprecia en los casos *sub examine*, pues, el señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETENCOURT**, identificado con cédula de ciudadanía número 17.6691.533, expedida en Florencia, Caquetá; quien para la fecha de la ocurrencia de los hechos se desempeñó como Alcalde del Municipio de El Paujil, Caquetá; pues la naturaleza de su cargo, en primer lugar tiene responsabilidad directa de la ordenación del gasto en condiciones de la protección de los recursos de la Entidad, buscando el mayor beneficio posible

para la comunidad que administra, los cuales debían buscar el menor precio posible en la compraventa objeto de investigación

Es evidente así, que las acciones desplegadas por el indiciado aluden con presuntas irregularidades en la compra del bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 420-109661, que de acuerdo con la Conclusión de la Denuncia D-003-16, obrante a folio 205 al 209, determinó un presunto detrimento patrimonial, lo que se eleva a daño fiscal el valor de **NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$96.032.548) M/CTE.**

9.1 Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal.

Se entiende por gestión fiscal de conformidad con el artículo 3 de la Ley 610 de 2000:

"(...) El conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas (...)". (Subrayado fuera de texto).

De esta forma, el proceso de responsabilidad fiscal está encaminado a obtener una declaración jurídica en el sentido que un determinado servidor público o particular que tenga a su cargo fondos o bienes del Estado debe asumir las consecuencias derivadas de las actuaciones irregulares en que haya incurrido de manera dolosa o culposa en la administración de los dineros públicos.

De otra parte, destaca el artículo 4 de la Ley 610 de 2000:

"ARTÍCULO 4o. OBJETO DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL. La responsabilidad fiscal tiene por objeto el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestión fiscal mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal.

Para el establecimiento de responsabilidad fiscal en cada caso, se tendrá en cuenta el cumplimiento de los principios rectores de la función administrativa y de la gestión fiscal.

PARAGRAFO 1o. La responsabilidad fiscal es autónoma e independiente y se entiende sin perjuicio de cualquier otra clase de responsabilidad."

Así mismo, se reitera que: La Responsabilidad Fiscal únicamente se puede pregonar respecto

de los servidores públicos o de los particulares que estén jurídicamente habilitados para ejercer gestión fiscal, es decir que tengan poder decisorio sobre fondos o bienes del Estado puestos a su disposición, advirtiéndose que esa especial responsabilidad está referida exclusivamente a los fondos o bienes públicos que hallándose bajo el radio de acción del titular de la gestión fiscal, sufran detrimento en la forma y condiciones prescritos por la Ley.

La Corte Constitucional ha resumido la doctrina constitucional sobre la naturaleza del proceso de responsabilidad fiscal, subrayando el carácter no penal o disciplinario del mismo:

"(...) Cabe destacar que este tipo de responsabilidad -la fiscal- se establece mediante el trámite de un proceso eminentemente administrativo, inicialmente regulado en la ley 42 de 1993 para el ámbito financiero y después en la ley 610 de 2000 para todos los casos, definido como el conjunto de actuaciones materiales y jurídicas que, con la observancia plena de las garantías propias del debido proceso, le compete adelantar a las Contralorías a fin de determinar la Responsabilidad que les asiste a los servidores públicos y a los particulares, por la mala administración o manejo de los dineros o bienes públicos a su cargo. A través del mencionado proceso, se persigue pues una declaración jurídica mediante la cual se defina que un determinado servidor público, ex-servidor o particular, debe responder patrimonialmente por la conducta dolosa o culposa en la realización de su gestión fiscal (...)". (Subrayado fuera del texto).

En este sentido, se tiene el presunto sobrecosto producto del pago del bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 420-109661, comprado por el Municipio de El Paujil, Caquetá, sin acudir ni solicitar avalúo comercial ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y en cambio optar por la compra del mencionado bien, producto de un avalúo comercial privado, con quien presuntamente para la época del avalúo no estaba certificado para realizarlo, como tampoco se evidencia la solicitud por parte del señor Alcalde realizar solicitud ante Fedelonjas, condujeron a determinarse detrimento patrimonial al Municipio de El Paujil, Caquetá.

Aunado a lo anterior, retomamos algunas de las funciones, competencias y obligaciones que conexas el vínculo como administrador fiscal a los hechos acontecidos, pertinentes al implicado, de la siguiente manera:

El señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**, identificado con cédula de ciudadanía número 17.691.533, expedida en Florencia, Caquetá; quien para la fecha de la ocurrencia de los hechos se desempeñó como Alcalde del Municipio de El Paujil, conformidad con la declaratoria de la Comisión Escrutadora Municipal de fecha 30 de octubre de 2011 (folio 203), el acta de posesión de fecha 31 de diciembre de 2011 obrante a folio 204, la promesa de compraventa No. 001, suscrita el día 26 de diciembre de 2013 (folio 8 al 10) y la ordenación del pago según comprobante de pago No. 3783 de fecha 30 de diciembre de 2013 (folio 12), cuyo

Constitución Política de Colombia en su artículo 315 establece dentro de sus funciones a cumplir:

"9. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto."

Pues la naturaleza del cargo tiene relación directa con la disposición y manejo de los recursos asignados al Municipio de El Paujil, Caquetá, con el fin de buscar y alcanzar los fines del Estado, por lo que se predica el nexo causal entre el hecho generador y la conducta culposa efectuada por el gestor fiscal.

La responsabilidad del Estado según la Corte Constitucional en Sentencia C-619 de agosto 8 de 2002, Magistrados Ponentes, Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil, señaló:

"(...) el criterio o fundamento de imputación de la responsabilidad patrimonial del agente frente al Estado ha sido claramente definido por el constituyente. Como ha quedado visto, él se circunscribe a los supuestos de dolo y culpa grave y, por tanto, no es posible que se genere responsabilidad patrimonial del agente estatal cuando su obrar con culpa leve o levísima ha generado responsabilidad estatal."

"Así las cosas, el criterio de imputación a aplicar en el caso de la responsabilidad fiscal no puede ser mayor al que el constituyente fijó para la responsabilidad patrimonial del funcionario frente al Estado, pues se estaría aplicando un trato diferencial de imputación por el solo hecho de que a la declaración de responsabilidad se accede por distinta vía (...)"

Es entonces, que se establece un nuevo marco jurídico para el daño antijurídico imputable al Estado como fundamento de su responsabilidad patrimonial. Debe tener origen en la conducta del agente que debe ser **dolosa o gravemente culposa**, para que pueda procederse a la indemnización resarcitoria a través de la acción de reparación establecida en la ley.

En consideración de los análisis realizados, cada vez que se establezca responsabilidad fiscal, debe enmarcarse la conducta en las acciones o actividades en el rango de dolo o culpa grave. Para abundar en definiciones es importante recordar la que trae a este propósito el Código Civil:

*"(...) **Culpa Grave:** "La que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios. Esta culpa en materia civiles equivale al dolo (...)" (artículo 63 del Código Civil).*



Nit. 891.190.246-1

De lo anterior se colige que se predica responsabilidad de carácter fiscal a cargo del implicado **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT A TÍTULO DE CULPA GRAVE**, por cuanto en su calidad de **Alcalde del Municipio de El Paujil, Caquetá**; para la época de los hechos, desconoció el ordenamiento jurídico acerca de los principios de las contratación estatal establecidas en el artículo 23 de la Ley 80 de 1993:

“ARTÍCULO 23. DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES DE LAS ENTIDADES ESTATALES. Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo.”

En consecuencia se evidencia que en su calidad de gestor fiscal, indica que no asumió con la debida responsabilidad la disposición y control de los bienes del Municipio, sobre los cuales se canceló el pago que se efectuó por parte del Municipio de El Paujil, Caquetá; al señor Heriberto Arcila Puentes en desarrollo del negocio jurídico compraventa del bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 420-109661, con destino a la construcción de un proyecto de vivienda, el cual se adquirió a través de un evaluador privado presuntamente no certificado para la época del avalúo ni se observa la solicitud ante Fedelonjas, además de que no se evidencia el trámite realizado por parte del Municipio ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi para el establecimiento de dicho avalúo, y que a la postre una vez realizado por parte de este Instituto determina un avalúo sensiblemente muy elevado próximamente en un 40%. Por tanto, el señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**, en su condición de Alcalde del Municipio de El Paujil, debió conservar el debido cuidado y manejo dado a los recursos de la Entidad Territorial al momento de adquirir el lote con destino a la construcción de vivienda, y es quien particularmente debía adoptar las medidas necesarias a efectos de asegurar la compra a precios del mercado, buscando el mejor precio que protegiera la finanzas de la Entidad.

En este sentido, el término manejar o administrar, no se refiere solamente al gasto público, de la norma se desprenden diferentes actividades como de adquisición, planeación, conservación, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, inversión, disposición y recaudación, de tal forma que su inversión produzca la maximización de resultados, obtener en igualdad de condiciones los bienes y servicios al menor costo posible logrando los objetivos y metas trazados teniendo en cuenta que el manejo de los recursos públicos está sujeto a las normas presupuestales vigentes.

Al respecto, es pertinente resaltar lo manifestado por la Contraloría General de la República en Concepto **80112-EE27661** del 07 de mayo de 2012, en el cual expuso “Una de las actividades más importantes para procurar una adecuada gestión fiscal que realiza la administración es la



Nit. 891.190.246-1

contratación estatal. Mediante esta, el Estado realiza parte importante de la ejecución de recursos públicos y por ello merece un especial control de los órganos de control creados en la Constitución Política.

En este mismo orden de ideas, la Honorable Corte Constitucional, en Sentencia C-713 de 1999, señaló lo siguiente:

*"El fin de la contratación pública en el Estado Social de Derecho está directamente asociado al cumplimiento del interés general, puesto que el contrato público es uno de aquellos "instrumentos jurídicos de los que se vale el Estado para cumplir sus finalidades, hacer efectivos los deberes públicos y prestar los servicios a su cargo, con la colaboración de los particulares a quienes corresponde ejecutar, a nombre de la administración, las tareas acordadas. El interés general, además de guiar y explicar la manera como el legislador está llamado a regular el régimen de contratación administrativa, determina las actuaciones de la Administración, de los servidores que la representan y de los contratistas, estos últimos vinculados al cumplimiento de las obligaciones generales de todo contrato y por ende supeditados al cumplimiento de los fines del Estado"*¹.

Se observa entonces que la conducta desplegada por el implicado generó una gestión inadecuada que conllevó a incurrir en las conductas determinadas en los artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000, que se refieren a la Gestión Fiscal y el Daño Patrimonial al Estado.

El artículo 1º de la Ley 610 de 2000, es enfático en establecer que mediante el proceso de responsabilidad fiscal se determina la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares cuando en el ejercicio de la gestión fiscal, o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado.

En tal sentido, el artículo 1º de la Ley 610 de 2000, expresamente indica "el proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado". (Subrayado fuera de texto).

Así las cosas, con todo lo anteriormente expuesto encuentra esta Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal acreditado el primer elemento constitutivo de la Responsabilidad Fiscal.

¹Corte Constitucional, Sentencia C-713 de 1999.

9.2. Un daño patrimonial al Estado

Respecto de la certeza del daño ha dicho la corte en sentencia SU- 620: “Desde los principios generales de responsabilidad, es necesario destacar que el daño debe ser cierto”. Se entiende que el daño es cierto cuando a los ojos del juez aparece con evidencia que la acción lesiva del agente ha producido o producirá una disminución patrimonial o moral en el demandante.

Por su parte la Ley 610 de 2000 artículo 6, establece:

ARTÍCULO 6o. DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, **uso indebido** o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, **inequitativa** e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público.

La Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en Sentencia del 04 de Abril de 1.998, Magistrado Ponente Doctor Fernando Hinestrosa, sostuvo sobre este requisito lo siguiente:

“(...) Dentro del concepto y la configuración de la responsabilidad civil, es el daño un elemento primordial y el único común a todas las circunstancias, cuya trascendencia fija el ordenamiento. De ahí que no se de responsabilidad sin daño demostrado, y que el punto de partida de toda consideración en la materia, tanto teórica como empírica, sea la enunciación, establecimiento y determinación de aquél, cuya falta resulta inoficiosa cualquier acción indemnizadora (...).”

Entonces, se tiene plenamente demostrado en el plenario un detrimento fiscal ocasionado al erario del **Municipio de San Vicente El Paujil**, toda vez que el implicado RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT quien ejercía funciones de Alcalde del mencionado Municipio quebrantó lo establecido en el artículo 26 de la Ley 80 de 1993, **“ARTÍCULO 23. DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES DE LAS ENTIDADES ESTATALES.** Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en



Nit. 891.190.246-1

las mismas las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo." En consecuencia, no se presentó el debido cuidado y la falta de diligencia en la compra del bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 420-1109661, en desarrollo de la compraventa, generándose un presunto detrimento en cuantía de NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$96.032.548) M/CTE., y por tanto se incurrió en una erogación antieconómica, ineficaz, inoportuna e injustificada, lo que conlleva a la certeza del daño.

Por lo anterior, el detrimento ocasionado al Municipio de El Paujil, Caquetá, se encuentra determinado en la suma de **NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$96.032.548) M/CTE.**, que corresponde al valor pagado por encima del avalúo comercial establecido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi para el mes de diciembre de la vigencia 2013 (fecha en que se produce la compra), es decir fue una conducta que omitió el señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, al no acudir en primera instancia al Instituto Geográfico Agustín Codazzi con el fin de establecer el valor comercial del predio que finalmente compró el Municipio de El Paujil, conforme a la normatividad y procedimiento, pudiendo haber evitado que se generara el detrimento patrimonial en cuantía de **NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$96.032.548) M/CTE.**

3. El nexa causal

Establecido de esta manera el hecho gravemente culposo y el daño que se le ha ocasionado al erario del **Municipio de El Paujil**, se deduce que se produjo con ocasión de la conducta del presunto responsable, el señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**, identificado con cédula de ciudadanía número 17.6691.533, expedida en Florencia, Caquetá, quien para la fecha de la ocurrencia de los hechos se desempeñó como Alcalde del Municipio de El Paujil, en lo relacionado con la compra con presunto sobre costo del bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 420-109661, desconociéndose los principios de la contratación estatal en la compra del tantas veces mencionado bien inmueble, de esta manera no se cumplió con los fines del Estado; en ejercicio de gestión fiscal, es la personas directamente responsable del daño ocasionado a los recursos del Estado, pues con la omisión del señor Alcalde y con la falta del debido cuidado, custodia y vigilancia del presupuesto municipal, conlleva a que se origine el detrimento patrimonial generando la cuantificación causación del daño.

En conclusión, la violación directa e inexcusable del ordenamiento jurídico, generó un desconocimiento de los principios que orientan la función administrativa. Por lo anterior, se hace acreedor de la imputación de responsabilidad fiscal configurada en este proceso.

Conforme lo dicho en la parte motiva del presente auto y a la percepción y señalamiento figurado en las pruebas acercadas al expediente, no hay duda alguna de la existencia de la irregularidad fiscal producida y de la cual está establecida y demostrado el daño al patrimonio del Estado y los demás elementos constitutivos que conlleva al auto de imputación de Responsabilidad Fiscal por los hechos aquí investigados conforme lo enmarca el artículo 48 de la Ley 610 de 2000.

El control fiscal es una función pública, que vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares que manejan recursos públicos, este control es ejercido por la Contraloría General de la República y/o Contralorías Territoriales, en procura del buen manejo de los recursos públicos y la buena inversión de los mismos para garantizar el cumplimiento de los fines esenciales del Estado.

La Constitución Política en su artículo 267, modificado por el acto legislativo No. 2 de 2015, establece que dicho control se ejerce de manera posterior y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y principios que establezca la ley, con el fin de vigilar, determinar y establecer la responsabilidad de quienes realizan la Gestión Fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación.

El **ejercicio del control fiscal** se hace necesaria la aplicación del régimen probatorio a fin de establecer la existencia de hechos que puedan generar detrimento patrimonial, que afecte los intereses estatales.

La Responsabilidad Fiscal que determinan las Contralorías, debe estar soportada en pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, a fin de garantizar el debido proceso y el derecho de defensa de los investigados, como derechos fundamentales consagrados en el **artículo 29 de la Constitución Política**.

La prueba es la **razón, argumento o elemento de convicción** que se saca del medio probatorio, para llevar el convencimiento al juez o investigador, sobre el acaecimiento de los hechos que se debaten en un proceso.

Para la recolección de las pruebas deben tenerse en cuenta los **principios** que rigen el aspecto probatorio y que se constituyen en los parámetros mínimos a tener en cuenta en la recolección e interpretación de las mismas.

Los principios de la prueba se refieren a los conceptos básicos que iluminan al operador en este caso, administrativo al momento de admitir, decretar, practicar y valorar los diversos tipos de pruebas que soportan el fallo. Estos principios son: **necesidad, unidad, comunidad,**

inmediación, publicidad, contradicción, evaluación, oportunidad, pertinencia, conducencia, igualdad, eficacia, equidad y el principio inquisitivo, entre otros.

Apreciar la prueba *“es la actividad intelectual que lleva a cabo el juez para medir la fuerza probatoria de un medio de prueba”*. Por lo tanto, **fuerza o valor probatorio** es la aptitud que tiene un hecho (solo o en concurrencia con otros) para demostrar judicialmente otro hecho o para que el mismo hecho quede demostrado.

Para adoptar su decisión con fundamento en la prueba, es indispensable que el juez se considere convencido por ella, o, dicho de otra manera, que se encuentre en **estado de certeza** sobre los hechos que declara.

Una indebida valoración del acervo probatorio puede generar una nulidad, que será la falta de motivación como irregularidad sustancial por violación de las formas propias de cada juicio, consistente en este caso, en no fijar el alcance de las pruebas en las cuales se fundamenta el juicio de responsabilidad (tipicidad – antijuridicidad y culpabilidad).

En el trámite procesal es necesario **PROBAR**, es decir, aportar al proceso los motivos o razones, por los medios y procedimientos aceptados por la ley, para llevarle al juez el convencimiento o la certeza sobre los hechos y la responsabilidad de las personas.

Esta garantía constitucional implica: el derecho a buscar la prueba, el derecho a postular la prueba, el derecho a que se le decrete la prueba, el derecho a que se le practique la prueba, el derecho a que se le niegue la prueba, el derecho a que se le valore la prueba. La cual se puede definir como las razones, argumentos o elementos de convicción que se sacan del medio probatorio, para llevar al convencimiento del Juez o Instructor, sobre el acaecimiento de los hechos que se debaten en el proceso.

La **carga probatoria** es una facultad discrecional de ofrecer y solicitar pruebas y de intervenir en su práctica. Para que los hechos, cosas y actos que se plantean en el proceso estén debidamente probados, se recurre a la práctica de pruebas. **En materia de responsabilidad fiscal le corresponde al Estado, en cabeza del órgano de control fiscal correspondiente, probar los hechos investigados.**

La Prueba ha sido definida como: *“Todo lo que sirve para darnos la certeza acerca de la verdad de una proposición. La Certeza está en nosotros, la verdad en los hechos. Aquella nace cuando uno cree que conoce ésta; más por la facilidad humana, puede haber certeza donde haya verdad y viceversa”*. Es necesario llevar a cabo las acciones tendientes a obtener la finalidad procesal de la prueba, siendo ésta *“la de producir la certeza sobre la existencia o inexistencia*



Nit. 891.190.246-1

del elemento típico de la responsabilidad (gestión fiscal) y los estructurales de la misma", a través de los diferentes medios de prueba.

Los conceptos de **conducencia y pertinencia** son conceptos diversos; mientras el primero alude a la idoneidad de la prueba para demostrar lo que se pretende probar, el concepto de pertinencia cubre la relación lógica entre el medio de prueba y lo que se pretende probar, o la relación que el hecho por probar puede tener con el litigio o la materia del proceso.

Al momento de llevar a cabo un análisis jurídico-fiscal en los hechos materia de investigación, el mismo se debe realizar de manera integral, apreciando cada una de las pruebas que reposan en el plenario, tanto las documentales, testimoniales, periciales o cualquier otro medio probatorio que se haya practicado dentro de los parámetros establecidos por nuestro ordenamiento jurídico.

Lo anterior con base en lo normado en el **artículo 26 de la Ley 610 de 2000** que determina: *"APRECIACIÓN INTEGRAL DE LAS PRUEBAS. Las pruebas deberán apreciarse en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica y la persuasión racional"*.

Lo anterior, permite inferir que el acervo probatorio contenido en las presentes diligencias conlleva a determinar responsabilidad fiscal en cabeza de los investigados, pues están dados los elementos contentivos de ella, los cuales se encuentran claramente definidos en el artículo 5 de la Ley 610 de 2000, esto es, *"- Una conducta dolosa o culpable atribuible a una persona que realiza gestión fiscal y - Un daño patrimonial al Estado y - Un nexo causal entre los dos elementos anteriores."*

En la Constitución Política de 1991 se reconoce expresamente la función de control fiscal, como una actividad independiente y autónoma, diferenciada de la que corresponde a las clásicas funciones estatales, lo cual obedece no sólo a un criterio de división y especialización de las tareas públicas, sino a la necesidad político-jurídica de controlar, vigilar y asegurar la correcta utilización, inversión y disposición de los fondos y bienes públicos que pertenecen a la Nación.

En efecto tenemos que las pruebas aportadas, se ciñen a los principios de conducencia, pertinencia y necesidad y se valorarán de conformidad con las reglas de la sana crítica y se apreciarán en forma racional y en aplicación de los principios que rigen la acción fiscal y la función administrativa, siguiendo los parámetros fijados por nuestra Carta Política en sus artículos 29 y 209, la Ley 610 de 2000, la Ley 1474 de 2011, Ley 80 de 1993; y las demás normas concordantes con el objetivo de establecer la verdad de estos hechos con aplicación de análisis objetivos, prudentes y veraces.

La Contraloría Departamental del Caquetá llevó a cabo el trámite de la Denuncia D-003-16, acerca de presuntas irregularidades presentada en la compra del bien inmueble identificado

con matrícula inmobiliaria No. 420-109661, de propiedad del señor Heriberto Arcila Puentes, evidenciándose presunto sobrecosto en la compra del mismo, toda que el Municipio de El Paujil no acudió al avalúo comercial realizado por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y en su defecto lo hizo a través de avalúo particular que si bien está facultado por la Ley, presuntamente se contrató con una persona no certificada al momento de rendir el avalúo comercial ni tampoco se evidencia haber acudido a Fedelonjas para que determinara la persona idónea para que lo realizara; sin embargo consultado por la Contraloría Departamental del Caquetá el avalúo al Instituto Geográfico Agustín Codazzi se evidencia un sobrecosto en cuantía de Noventa y Seis Millones Treinta y Dos Mil Quinientos cuarenta y Ocho Pesos (\$96.032.548) M/Cte.,

Por lo anterior se observa la existencia de una gestión fiscal ineficiente, ineficaz, antieconómica y desconocedora del ordenamiento jurídico para la realización del avalúo comercial del mencionado bien inmueble para la época de los hechos.

10. TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE

De conformidad con el artículo 44 de la Ley 610 de 2000, este Despacho procedió a vincular mediante Auto de Apertura No. 025 de fecha 18 de diciembre de 2018, visible a folios 152 al 162, por los hechos presuntamente irregulares que se encuentran afianzados por la siguiente póliza expedida por la compañía de Seguros Aseguradora de Colombia, Seguro Póliza Multirriesgos No. 630-73-994000000032, vigente desde el 01 de noviembre de 2013 hasta el 01 de marzo de 2014, la cual amparaba la Cobertura Global de Sector Oficial por valor de \$100.000.000 M/Cte., constituidas a favor del Municipio de El Paujil, Caquetá.

Al respecto, es preciso señalar que el deducible pactado corresponde al 10% sobre el valor de la pérdida, así como también la Cobertura que se pretende hacer efectiva corresponde a la de Manejo Global Sector Oficial, precisando que la Entidad asegurada es el Municipio de El Paujil, Caquetá; asegurando que los hechos objeto de cobertura acaecieron dentro de la vigencia de la citada póliza que se pretenden afectar según lo dispuesto por el artículo 1073 del código de comercio, respecto al trámite de la Denuncia D-003-16, por la cuantía establecida de **Noventa y Seis millones Treinta y Dos Mil Quinientos Cuarenta y Ocho Pesos (\$96.032.548) M/Cte.**, se afectará la Póliza Multirriesgo No. 630-73-994000000032, hasta por la suma de **Cien Millones de Pesos (\$100.000.000) M/Cte.**,

11. INSTANCIA

Una vez establecida la cuantía del detrimento al patrimonio del Estado en la suma de **NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$96.032.548) M/CTE.**, y teniendo en cuenta que el valor de la menor cuantía



Nit. 891.190.246-1

establecido para la contratación del Municipio de El Paujil, Caquetá, para la vigencia 2013, corresponde a la suma de **CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES SESENTA MIL PESOS (\$165.060.000) M/CTE.**, tal y como se evidencia en la certificación obrante a folio 200, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley 1474 de 2011, el presente Proceso de Responsabilidad Fiscal se tramitará en UNICA INSTANCIA dado que el valor estimado del detrimento no supera el valor de la menor cuantía establecido para la contratación de la entidad afectada.

Por lo anteriormente expuesto, este Despacho,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imputar Responsabilidad Fiscal en cuantía de **NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$96.032.548) M/CTE.**, en contra del señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**, identificado con la cédula de ciudadanía número 17.691.533, expedida en Florencia; Caquetá; quien se desempeñó como **ALCALDE DEL MUNICIPIO DE EL PAUJIL, CAQUETÁ**, inclusive para la época de ocurrencia de los hechos, y tener como tercero civilmente responsable a la aseguradora **SOLIDARIA DE COLOMBIA**, en la cuantía **OCHENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (\$86.429.293) M/CTE.**, en virtud de las póliza No. 630-73-994000000032, vigente desde el 01 de noviembre de 2013 hasta el 01 de marzo de 2014, expedidas por la **Compañía de Seguros Solidaria de Colombia NIT 860.524.654-6**, conforme se expresa en la parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar la responsabilidad fiscal a favor del investigado **HERIBERTO ARCILA PUENTES**, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.681.291, toda vez que de acuerdo con las consideraciones realizadas en la presente providencia no comportó la gestión fiscal.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente del presente auto conforme al artículo 106 de la Ley 1474 de 2011, así:

- 1) Al señor **Rodrigo Andrés Castro Betancourt**, al correo electrónico rodrigoandrescastro@hotmail.com, y a través de su defensor de oficio la estudiante de Derecho John Edwin Ortiz Cuéllar, al correo electrónico john.ortiz@udla.edu.co (folio 279).
- 2) Al señor **Heriberto Arcila Puentes**, al correo electrónico luisarcila2424@gmail.com (folio 292).
- 3) Al tercero Civilmente Responsable la compañía de **Seguros Solidaria de Colombia** al correo electrónico notificaciones@solidaria.com.co

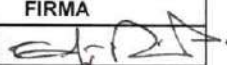

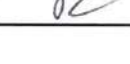
ARTÍCULO CUARTO: Fíjese el presente proceso de **UNICA INSTANCIA** teniendo en cuenta que el detrimento al patrimonio del Estado corresponde a la suma de **NOVENTA Y SEIS MILLONES TRIENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$96.032.548) M/CTE.**, teniendo en cuenta que el valor de la menor cuantía establecido para la contratación del Municipio de El Paujil, Caquetá; para la vigencia 2013 corresponde a la suma de **CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES SESENTA MIL PESOS (\$165.060.000) M/CTE.**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley 1474 de 2011.

ARTÍCULO QUINTO: Dejar el presente proceso en la Secretaría de esta Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal, para que los sujetos procesales, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del proceso, presenten los argumentos de defensa frente a las imputaciones aquí señaladas y solicitar o aportar las pruebas que pretendan hacer valer de conformidad al art. 50 de la Ley 610 de 2000.

ARTÍCULO SEXTO: Cumplido el término anterior, por la Secretaría de este Despacho remítase el presente proceso al Despacho del señor Contralor Departamental del Caquetá para que surta el grado de consulta respecto del presente Auto de Imputación Mixta, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 610 de 2000.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,


HERLINDA JOHANA RIVERA RAMÍREZ
Directora Técnica de Responsabilidad Fiscal

	NOMBRE	CARGO	FECHA	FIRMA
Elaboró:	Edgar Medina Pérez	Profesional Universitario	26-02-24	
Revisó	Herlinda Johana Rivera Ramirez	DTRF.	26-02-24	
Aprobó:	Herlinda Johana Rivera Ramirez	DTRF.	26-02-24	



Nit. 891.190.246-1

AUTO No. 003

**MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE RECURSO DE REPOSICIÓN
DENTRO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 1148**

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO:

PRESUNTOS RESPONSABLES	RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURTH C.C. 17.691.533 HERIBERTO ARCILA PUENTES C.C. 6.681.291
ENTIDAD AFECTADA	MUNICIPIO DE EL PAUJIL
PRESUNTO DETRIMENTO	\$96.032.548 (Noventa y Seis Millones Treinta y Dos Mil Quinientos Cuarenta y Ocho Pesos)
POLIZA No.	930-73-994000000032
ASEGURADORA	Compañía de Seguros Solidaria de Colombia

En la ciudad de Florencia, Caquetá a los cinco (05) días del mes de julio de dos mil veinticuatro (2024), el suscrito Director Técnico de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental, procede a resolver el **RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto contra el Fallo Fiscal No. 004 del 20 de junio de 2024**, dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal Ordinario de Única Instancia No. 1148 con fundamento en los siguientes:

2. ANTECEDENTES

Originó la presente investigación el memorando CF- 066 del 05 de abril de 2016, por medio del cual la Dirección Técnica de Control Fiscal Integral, remite la denuncia D-003-16, relacionada con presuntas irregularidades relacionadas con el sobrecosto en la compra de un lote para los desplazados en el Municipio de El Paujil.

De acuerdo con el traslado de la denuncia D-003-16, se estableció que el Municipio de El Paujil suscribió el Contrato de Compraventa No. 001 del 26 de diciembre de 2013, con el señor Heriberto Arcila puentes, en cuantía de Doscientos cuarenta Millones de pesos (\$240.000.000) M/Cte., con el objeto de adquirir un predio con destino a la construcción del proyecto de vivienda en beneficio de la población vulnerable del citado ente territorial, el cual fue adquirido presuntamente con sobrecosto en cuantía de **NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$96.032.548) M/CTE.**

Mediante Auto No. 025 de fecha 18 de diciembre de 2018, esta Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal procedió a dar apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 1148 (folio 228 al 233 y reversos), en contra de los señores: **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURTH**, identificado con cédula de ciudadanía No. 217.691.533 expedida en Florencia, quien se desempeñó para la ocurrencia de los hechos como Alcalde del Municipio de



Nit. 891.190.246-1

El Paujil, Caquetá; para la época de los hechos, y **HERIBERTO ARCILA PUENTES**, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.681.291, quien se desempeñó como vendedor del lote de terreno identificado con matrícula inmobiliaria No. 420-109661, de la jurisdicción del Municipio de El Paujil, Caquetá, según certificado de libertad y tradición de fecha 26 de diciembre de 2013, obrante a folio 9 al 50. Y en calidad de tercero civilmente responsable a la compañía de seguros Solidaria de Colombia.

Mediante Auto No. 034 de fecha 30 de septiembre de 2019, el Director Técnico de Responsabilidad Fiscal en ejercicio de la competencia establecida en la Ley 610 de 2000 y la Resolución No. 229 del fecha 25 de agosto de 2015, procedió a dictar Auto de designación de apoderado de oficio dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 1148, para los investigados **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT** y **HERIBERTO ARCILA PUENTES**, quienes para la época de los hechos se desempeñaron como Alcalde del Municipio de El Paujil, Caquetá y Vendedor del predio objeto del Contrato de Compraventa; con el fin de que los representaran dentro de este proceso fiscal, garantizándoles así el derecho de defensa y contradicción a los investigados, con el objeto de cumplir el debido proceso y otorgar sin lugar a dudas todas las garantías procesales inherentes a los investigados (folio 244 al

El día 26 de febrero de 2021, mediante Auto de Imputación Mixta No. 001, se procedió a imputar responsabilidad fiscal contra: **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT** en cuantía de Noventa y Seis Millones Treinta y Dos Mil Quinientos Cuarenta y Ocho Pesos (\$96.032.548) M/Cte., y en contra del Tercero Civilmente Responsable la compañía de Seguros **SOLIDARIA DE COLOMBIA DE COLOMBIA S.A.** De igual manera se procedió al archivo parcialmente a favor del señor **HERIBERTO ARCILA PUENTES** (folio 295 al 330).

Mediante Grado de Consulta No. 114 de fecha 21 de marzo de 2024, se confirma el Auto de Imputación Mixta No. 001 de fecha 26 de febrero de 2024 (folio 370 al 385).

Mediante Auto No. 008 de fecha 03 de abril de 2024, se resolvió solicitud de práctica de pruebas (folio 390 al 396).

Mediante Auto No. 009 de fecha 17 de abril de 2024, se resolvió recurso de reposición frente al Auto No. 008, a través del cual se decidió práctica de pruebas dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 1148 (folio 422 al 439).

Mediante Auto No. 004 de fecha 20 de julio de 2024, se decidió Fallo con Responsabilidad Fiscal de la misma fecha en cuantía de **CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS (172.510.957) M/CTE.** (folio 502 al 653).

3. FUNDAMENTOS DE DERECHO



Nit. 891.190.246-1

Como fundamento de derecho se aducen las siguiente:

- Artículos 267, 268 y 271 de la Constitución Política de Colombia, artículos modificados por el Acto Legislativo 4 de 2019, los cuales establecen que la vigilancia del Control Fiscal de la Administración Pública corresponde a las Contralorías.
- Ley 610 del 15 de agosto de 2000, por la cual se establece el trámite de los Procesos de Responsabilidad Fiscal de competencia de las Contralorías.
- Ley 1474 del 12 de julio de 2011, modificada parcialmente por el Decreto 403 de 2020, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
- Ley 80 de 1993.
- Las demás normas que se referencien.

4. ENTIDAD ESTATAL AFECTADA

Municipio de El Paujil, Caquetá con NIT. 800-095.763-0.

5. CUANTÍA

El detrimento patrimonial determinado en desarrollo del trámite de la Denuncia No. Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial, practicada al Municipio de El Paujil, Caquetá, asciende a la suma de **CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS (\$172.510.957 M/CTE.**

6. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Sea lo primero advertir que para declarar responsable a un implicado en un proceso de Responsabilidad Fiscal, las pruebas existentes en el expediente deben, primero, haber sido allegadas al plenario de manera legal, es decir, conforme al ordenamiento jurídico, segundo, deben conducir sin lugar a equívocos a la certeza del daño al erario y el grado de responsabilidad de los implicados, tercero, que dichos soportes probatorios deben ser analizados y apreciados por el investigador en conjunto, en otros términos de manera integral y, para ello debe el órgano fiscalizador aplicar las reglas de la sana crítica y la persuasión racional.

En el trámite procesal es necesario probar, es decir, aportar al proceso los motivos o razones, por los medios y procedimientos aceptados por la ley, para llevarle al juez el convencimiento o la certeza sobre los hechos y la responsabilidad de las personas.



Nit. 891.190.246-1

Esta garantía constitucional implica: el derecho a buscar la prueba, el derecho a postular la prueba, el derecho a que se le decrete la prueba, el derecho a que se le practique la prueba, el derecho a que se le niegue la prueba, el derecho a que se le valore la prueba. La cual se puede definir como las razones, argumentos o elementos de convicción que se sacan del medio probatorio, para llevar al convencimiento del Juez o Instructor, sobre el acaecimiento de los hechos que se debaten en el proceso.

La Contraloría es juez y parte en el proceso y al tener un interés, soporta la carga de la prueba. El artículo 187 del C.P.C. estipula que: "...las pruebas deberán apreciarse en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o la validez de ciertos actos".

En consecuencia, procederá este Despacho a pronunciarse sobre los argumentos planteados por la estudiante de Derecho Luz Marina Moreno Sarabia, defensora de oficio del señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, en la cual impetra nulidad procesal:

A folio 689, reposa constancia secretarial de fecha 28 de junio de 2024, en la cual se manifiesta: "Que a última hora hábil de oficina del día 27 de junio de 2024, vencieron los términos con que disponía la estudiante de derecho **LUZ MARINA MORENO SANABRIA** Defensora de oficio del señor **RODRIGO ANDRES CASTRO BETANCOURT** para presentar Recurso de Reposición frente al Fallo Fiscal N° 004 del 20 de junio de 2024, presentación que hace en términos del mencionado recurso."



DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL
CONSTANCIA SECRETARIAL

Florencia, 28 de junio del 2024

Referencia: Proceso de Responsabilidad Fiscal N° 1148

Que a última hora hábil de oficina del día 27 de junio del 2024, vencieron los términos con que disponía la estudiante de derecho **LUZ MARINA MORENO SANABRIA** Defensora de oficio del señor **RODRIGO ANDRES CASTRO BETANCOURT** para presentar Recurso de Reposición frente al Fallo Fiscal N° 004 del 20 de junio del 2024, presentación que hace en términos del mencionado recurso.

LIESEL JOULIETH CORREA FORERO
Secretaria



Nit. 891.190.246-1

Verificada la presentación del Recurso de reposición impetrado (folio 677 al 685), evidencia este Despacho que dentro de las pretensiones de la recurrente se remite a la presentación de nulidad procesal en esta instancia administrativa, ante la cual se resolverá de la siguiente manera:

Respecto de la nulidad presentada se desatará así:

El artículo 36 de la Ley 610 de 2000, expone las causales de nulidad del proceso fiscal y el artículo 109 de la ley 1474 de 2011 dispone que la solicitud de nulidad puede hacerse hasta antes de **"proferirse fallo definitivo"**, entonces considera esta Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal que el entendimiento que debe darse a la anterior frase, debe ser con una referencia al fallo señalado **en el artículo 53 de la misma ley**, pues a este se incorporan las decisiones de única, primera o segunda instancia. (Subrayado y negrillas fuera de texto).

Ahora, de conformidad con lo expuesto por el Viceprocurador General de la Nación en el fallo de reposición de única instancia proferido el 27 de febrero de 2004: "(...) La petición de nulidad podrá formularse hasta "antes de proferirse el fallo definitivo, esto es, hasta antes del fallo de primera o única instancia (artículo 146 del CDU)... **Si así no se entendiera la norma entonces no existiría límite a la petición de nulidad**, pues operaría en cualquier momento procesal, esto es, después del fallo de primera instancia y antes de resolver la segunda o después del fallo de única y antes de la reposición; luego entonces, en cualquier oportunidad procesal, pues proferidas esas decisiones pendientes se han agotado las instancias. De allí que, como en el presente caso, las peticiones de nulidad efectuadas antes del fallo de primera instancia y debidamente resueltas, como las que se hacen después del fallo objeto de esta reposición, **son asuntos de los cuales no puede ocuparse nuevamente el despacho, toda vez que dichas peticiones son manifiestamente inconducentes y dilatorias en los términos de los artículos 142 numeral 2º. del C. de P.P., 38 numeral 2º. del C. de P.C. y 21 del CDU**". (Subrayado y negrilla fuera de texto).

Entonces, citado lo anterior, es evidente que una Solicitud de Nulidad que se impetra después de proferido el Fallo con Responsabilidad Fiscal No. 004 de fecha 20 de junio de 2024, es completamente improcedente por extemporánea, puesto que el artículo 109 de la Ley 1474 de 2011, prescribe que solo puede impetrarse hasta antes del fallo definitivo, entendido como el que pone fin al procedimiento y que es el de única instancia, ya que después de él sólo queda la interposición de recursos.

Es decir, una vez proferido el Fallo de Responsabilidad Fiscal, se pierde competencia por parte del funcionario competente, para modificar la decisión tomada definitivamente y se limita la decisión a los argumentos de reposición que presenten los presuntos responsables. Ello es tan cierto que, al no interponerse los recursos dentro del término legal establecido para ello, la decisión queda firme.



Nit. 891.190.246-1

Es claro entonces, que las nulidades a invocarse una vez proferido fallo en los procesos de responsabilidad fiscal no pueden ser resueltas, por ser extemporáneas, pues ya existió un fallo definitivo como lo es el de única instancia.

De conformidad con lo señalado en el artículo 109 de la Ley 1474 de 2011 se infiere que los incidentes de nulidad presentados con posterioridad al fallo no son viables.

En igual sentido, la Contraloría General de la República, mediante Concepto E0038709 que cita de manera textual el concepto 80112- 1E96211 del 09 de septiembre de 2013, señaló:

"Es importante advertir que la nulidad es un mecanismo extremo al cual debe recurrir el funcionario competente, para subsanar irregularidades o vicios presentados en el proceso, cuya magnitud y trascendencia sean tales que afecten el proceso en su estructura o contrasten con las garantías fundamentales previstas en el Art. 29 de la Carta Política. No se declarará la invalidez de un acto cuando cumpla la finalidad para la que estaba destinado, siempre que no se viole el derecho a la defensa. Quien alegue la nulidad debe demostrar que la irregularidad sustancial afecta garantías de los sujetos procesales, o desconoce las bases fundamentales de la instrucción y el juzgamiento. No puede invocar la nulidad el sujeto procesal que haya coadyuvado, con su conducta, a la ejecución del acto irregular, salvo que se trate de la falta de defensa técnica. Los actos irregulares pueden convalidarse con el consentimiento del perjudicado, siempre que se observen las garantías constitucionales. Sólo puede decretarse cuando no exista otro medio procesal para subsanar la irregularidad sustancial. Podrán proponerse causales de nulidad hasta antes de proferirse el fallo definitivo. Ahora bien, ¡el objetivo que persigue la nulidad es la de garantizar el debido proceso y enderezar la actuación procesal en derecho, subsanando las irregularidades y vicios.

Empero, la nulidad puede ser decretada de oficio o a petición de parte, el funcionario competente podrá declarar en cualquier estado del proceso la nulidad parcial o total de lo actuado, mediante providencia debidamente motivada, las pruebas decretadas y aportadas legalmente antes de la declaratoria de nulidad, conservan plenamente su validez de conformidad con el Código de Procedimiento Civil.

*El capítulo III de la Ley 610 de 2000, por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal, reglamenta las nulidades en estos procesos, en los siguientes términos: **"Artículo 36. Causales de nulidad.** Son causales de nulidad en el proceso de responsabilidad fiscal la falta de competencia del funcionario para conocer y fallar; la violación del derecho de defensa del implicado; o la comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso. La nulidad será decretada por el funcionario de conocimiento del proceso. **Artículo 37. Saneamiento de nulidades.** En cualquier etapa del proceso en que el funcionario advierta que existe alguna de las*



Nit. 891.190.246-1

causales previstas en el artículo anterior, decretará la nulidad total o parcial de lo actuado desde el momento en que se presentó la causal y ordenará que se reponga la actuación que dependa del acto declarado nulo, para que se subsane lo afectado. Las pruebas practicadas legalmente conservarán su plena validez. Estas normas son aplicables a los procesos de responsabilidad fiscal que se tramiten por el procedimiento ordinario y verbal. En cuanto al término para proponer las nulidades, la Ley 610 en su artículo 38 señala: **"Artículo 38. Término para proponer nulidades.** Podrán proponerse causales de nulidad hasta antes de proferirse el fallo definitivo. En la respectiva solicitud se precisará la causal invocada y se expondrán las razones que la sustenten. Sólo se podrá formular otra solicitud de nulidad por la misma causal por hechos posteriores o por causal diferente. Contra el auto que resuelva las nulidades procederán los recursos de reposición y apelación". (Negrillas fuera de texto).

Este artículo fue subrogado por el artículo 109 de la Ley 1474 de 2011, en donde señala que la **solicitud de nulidad podrá formularse hasta antes de proferirse la decisión final**, (decisión de la primera instancia). Excepcionalmente y cuando los motivos que generen la nulidad sean posteriores a la decisión de primera instancia, será posible hacer esta solicitud pero teniendo en cuenta que la causa de la nulidad fue **posterior al fallo de responsabilidad fiscal**. La solicitud de nulidad se resolverá dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de su presentación; solamente es aplicable en los Procesos que se tramiten por el procedimiento ordinario. (Negrillas fuera de texto).

En conclusión, en materia de responsabilidad fiscal de acuerdo con la oportunidad que establece la ley 1474 de 2011, la nulidad por regla general debe proponerse con antelación a la providencia que determine si el procesado es o no responsable fiscalmente; empero, permite de manera excepcional el incidente bajo la óptica de causales que surjan con posterioridad a la decisión, acción que el recurrente no ha realizado.

En virtud de las anteriores disquisiciones, esta Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal, considera que la Solicitud de Nulidad impetrada por la estudiante de derecho Luz Marina Moreno Sanabria, en calidad de defensor de oficio del señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, es improcedente toda vez que la Contraloría emitió Fallo No. 004 de fecha 20 de junio de 2024, el cual fue notificado personalmente a la defensora de oficio el día 20 de junio de 2024 (folio 662 al 664), es decir, la defensora conocía que ya existía un fallo definitivo al momento en que radicó el incidente de nulidad el día 27 de junio de 2024, por lo que se considera que bajo los artículos ya citados queda más que justificada que la petición fue después a la decisión; adicionalmente, de la lectura de la nulidad no se observa la existencia de una causal de nulidad sobreviniente a la emisión de la decisión.

Ahora bien, este Despacho en aras de despejar las dudas de su proceder y pese a que esta solicitud de nulidad es extemporánea e improcedente se permite aclararle a la defensora de



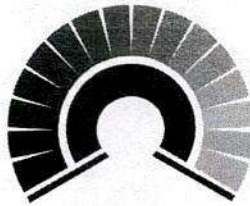
Nit. 891.190.246-1

oficio del señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, que por la causal 3° del artículo 36 de la ley 610 de 2000, es decir, **“la comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso”**, la cual está intrínsecamente relacionada, no le asiste postulación cuando solicita se declare la nulidad del Fallo Fiscal No. 004 de fecha 20 de junio de 2024, que dispuso Fallar con Responsabilidad Fiscal en contra del investigado, cuando se ha comprobado que existe plena congruencia entre lo que inició como proceso de investigación y lo que finalmente se falla, basado en la prueba que se decretó sobre la solicitud de testimonio realizado por la parte procesa avocada, **conduce a la certeza sin lugar a equívocos** que efectivamente se presentó detrimento patrimonial en desarrollo de la ejecución de Contrato de Promesa de Compraventa No. 001 de 2013, y sobre lo cual se debe Fallar con Responsabilidad Fisca, toda vez que no han sido desvirtuado los argumentos de este Despacho.

Ahora bien, la defensora de oficio solicita expresamente se decrete la nulidad de todo lo actuado desde la emisión del Fallo con Responsabilidad Fiscal No. 004 de 2024, por cuanto no se corresponde con la imputación efectuada por este Ente de Control en el proceso de la referencia, dando aplicación a la causal tercera de nulidad denominada “comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso” consagrada en el artículo 36 de la Ley 610 de 2000. Actuación que realizó este Despacho el día 20 de junio de 2024, a partir del auto No. 004 de la misma fecha,, **pretendiendo desconocer que ya se encuentra un fallo definitivo a la situación jurídica del señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, el cual fue notificado personalmente del mismo tanto al sancionado como a su defensora de oficio y por lo cual, amerita el rechazo de plano del incidente por extemporáneo e improcedente de conformidad con las consideraciones expuestas.**

En ese orden de ideas, esta Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal, considera que la Solicitud de Nulidad radicada por la estudiante de derecho Luz Marina Moreno Sanabria, en primer lugar, **se presentó de forma extemporánea y por tanto es improcedente,** luego no puede después de haberse proferido el fallo fiscal pretender que se conceda la nulidad, y segundo, no se evidencia motivo de nulidad posterior al fallo fiscal; y por consiguiente, **no será concedida por este Despacho, y por tanto en esta instancia se confirmará el Fallo Fiscal No. 004 de fecha 20 de junio de 2024, dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal Ordinario de única Instancia No. 1148.**

A folio 690 reposa constancia secretarial en la cual se manifiesta: “Que a última hora hábil de oficina del día 03 de julio de 2024, vencieron en silencio los términos con que disponía la compañía de seguros solidaria de Colombia, para interponer recurso de reposición contra el Fallo Fiscal N° 004 del 20 junio de 2024, notificado el día 25 de junio de 2024.”



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

Nit. 891.190.246-1



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

Nit. 891.190.246-1

DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

CONSTANCIA SECRETARIAL

Florencia, 04 de julio del 2024

Referencia: Proceso de Responsabilidad Fiscal N° 1148

Que a última hora hábil de oficina del día 03 de julio del 2024, vencieron en silencio los términos con que disponía la compañía de seguros solidaria de Colombia, para interponer recurso de reposición contra el Fallo Fiscal N° 004 del 20 junio del 2024, notificado el día 25 de junio del 2024.

Pasa al despacho para lo de su competencia.


LIESEL JOULLIETH CORREA FORERO
Secretaria

De igual manera a folio 738, reposa constancia secretarial la cual manifiesta:

CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

Nit. 891.190.246-1

DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

CONSTANCIA SECRETARIAL

Florencia, 05 de julio del 2024

Referencia: Proceso de Responsabilidad Fiscal N° 1148

Que el día 04 de julio del 2024 la Compañía de seguros solidaria de Colombia a través de su Defensor de Confianza el Doctor GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA presentó escrito invocando nulidad procesal por indebida notificación del Auto de Imputación Mixta N°001 del 26 de febrero del 2024, siendo las 14:25 del día 04 de julio del 2024.

Que el día 04 de julio del 2024 la compañía de seguros solidaria de Colombia a través de su Defensor de Confianza el Doctor GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA presentó recurso de reposición frente al fallo fiscal N° 004 del 20 de junio del 2024, siendo las 14:41 del 04 de julio del 2024

Pasa al despacho para lo de su competencia.


LIESEL JOULLIETH CORREA FORERO
Secretaria

Frente a la petición de nulidad procesal este Despacho se pronunciará de la siguiente manera:

El artículo 36 de la Ley 610 de 2000, expone las causales de nulidad del proceso fiscal y el artículo 109 de la ley 1474 de 2011 dispone que la solicitud de nulidad puede hacerse hasta antes de **"proferirse fallo definitivo"**, entonces considera esta Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal que el entendimiento que debe darse a la anterior frase, debe ser con una referencia al fallo señalado **en el artículo 53 de la misma ley**, pues a este se incorporan las decisiones de única, primera o segunda instancia. (Subrayado y negrillas fuera de texto).

Ahora, de conformidad con lo expuesto por el Viceprocurador General de la Nación en el fallo de reposición de única instancia proferido el 27 de febrero de 2004: "(...) La petición de nulidad podrá formularse hasta "antes de proferirse el fallo definitivo, esto es, hasta antes del fallo de primera o única instancia (artículo 146 del CDU) ... **Si así no se entendiera la norma entonces no existiría límite a la petición de nulidad**, pues operaría en cualquier momento procesal, esto es, después del fallo de primera instancia y antes de resolver la segunda o después del fallo de única y antes de la reposición; **luego entonces, en cualquier oportunidad procesal, pues proferidas esas decisiones pendientes se han agotado las instancias. De allí que, como en el presente caso, las peticiones de nulidad efectuadas antes del fallo de primera instancia y debidamente resueltas, como las que se hacen después del fallo objeto de esta reposición, son asuntos de los cuales no puede ocuparse nuevamente el despacho, toda vez que dichas peticiones son manifiestamente inconducentes y dilatorias en los términos de los artículos 142 numeral 2º. del C. de P.P., 38 numeral 2º. del C. de P.C. y 21 del CDU**". (Subrayado y negrilla fuera de texto).

Entonces, citado lo anterior, es evidente que una Solicitud de Nulidad que se impetra después de proferido el Fallo con Responsabilidad Fiscal No. 004 de fecha 20 de junio de 2024, es completamente improcedente por extemporánea, puesto que el artículo 109 de la Ley 1474 de 2011, prescribe que solo puede impetrarse hasta antes del fallo definitivo, entendido como el que pone fin al procedimiento y que es el de única instancia, ya que después de él sólo queda la interposición de recursos.

Es decir, una vez proferido el Fallo de Responsabilidad Fiscal, se pierde competencia por parte del funcionario competente, para modificar la decisión tomada definitivamente y se limita la decisión a los argumentos de reposición que presenten los presuntos responsables. Ello es tan cierto que, al no interponerse los recursos dentro del término legal establecido para ello, la decisión queda firme.

Es claro entonces, que las nulidades a invocarse una vez proferido fallo en los procesos de responsabilidad fiscal no pueden ser resueltas, por ser extemporáneas, pues ya existió un fallo definitivo como lo es el de única instancia.



Nit. 891.190.246-1

De conformidad con lo señalado en el artículo 109 de la Ley 1474 de 2011 se infiere que los incidentes de nulidad presentados con posterioridad al fallo no son viables.

En igual sentido, la Contraloría General de la República, mediante Concepto E0038709 que cita de manera textual el concepto 80112- 1E96211 del 09 de septiembre de 2013, señaló:

"Es importante advertir que la nulidad es un mecanismo extremo al cual debe recurrir el funcionario competente, para subsanar irregularidades o vicios presentados en el proceso, cuya magnitud y trascendencia sean tales que afecten el proceso en su estructura o contrasten con las garantías fundamentales previstas en el Art. 29 de la Carta Política. No se declarará la invalidez de un acto cuando cumpla la finalidad para la que estaba destinado, siempre que no se viole el derecho a la defensa. Quien alegue la nulidad debe demostrar que la irregularidad sustancial afecta garantías de los sujetos procesales, o desconoce las bases fundamentales de la instrucción y el juzgamiento. No puede invocar la nulidad el sujeto procesal que haya coadyuvado, con su conducta, a la ejecución del acto irregular, salvo que se trate de la falta de defensa técnica. Los actos irregulares pueden convalidarse con el consentimiento del perjudicado, siempre que se observen las garantías constitucionales. Sólo puede decretarse cuando no exista otro medio procesal para subsanar la irregularidad sustancial. Podrán proponerse causales de nulidad hasta antes de proferirse el fallo definitivo. Ahora bien, el objetivo que persigue la nulidad es la de garantizar el debido proceso y enderezar la actuación procesal en derecho, subsanando las irregularidades y vicios.

Empero, la nulidad puede ser decretada de oficio o a petición de parte, el funcionario competente podrá declarar en cualquier estado del proceso la nulidad parcial o total de lo actuado, mediante providencia debidamente motivada, las pruebas decretadas y aportadas legalmente antes de la declaratoria de nulidad, conservan plenamente su validez de conformidad con el Código de Procedimiento Civil.

*El capítulo III de la Ley 610 de 2000, por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal, reglamenta las nulidades en estos procesos, en los siguientes términos: **"Artículo 36. Causales de nulidad.** Son causales de nulidad en el proceso de responsabilidad fiscal la falta de competencia del funcionario para conocer y fallar; la violación del derecho de defensa del implicado; o la comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso. La nulidad será decretada por el funcionario de conocimiento del proceso. **Artículo 37. Saneamiento de nulidades.** En cualquier etapa del proceso en que el funcionario advierta que existe alguna de las causales previstas en el artículo anterior, decretará la nulidad total o parcial de lo actuado desde el momento en que se presentó la causal y ordenará que se reponga la actuación que dependa del acto declarado nulo, para que se subsane lo afectado. Las pruebas practicadas legalmente conservarán su plena validez. Estas normas son*



Nit. 891.190.246-1

aplicables a los procesos de responsabilidad fiscal que se tramiten por el procedimiento ordinario y verbal. En cuanto al término para proponer las nulidades, la Ley 610 en su artículo 38 señala: **"Artículo 38. Término para proponer nulidades.** Podrán proponerse causales de nulidad hasta antes de proferirse el fallo definitivo. En la respectiva solicitud se precisará la causal invocada y se expondrán las razones que la sustenten. Sólo se podrá formular otra solicitud de nulidad por la misma causal por hechos posteriores o por causal diferente. Contra el auto que resuelva las nulidades procederán los recursos de reposición y apelación". (Negrillas fuera de texto).

Este artículo fue subrogado por el **artículo 109 de la Ley 1474 de 2011**, en donde señala que **la solicitud de nulidad podrá formularse hasta antes de proferirse la decisión final**, (decisión de la primera instancia). Excepcionalmente y cuando los motivos que generen la nulidad sean posteriores a la decisión de primera instancia, será posible hacer esta solicitud, pero teniendo en cuenta que la causa de la nulidad fue **posterior al fallo de responsabilidad fiscal**. La solicitud de nulidad se resolverá dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de su presentación; solamente es aplicable en los Procesos que se tramiten por el procedimiento ordinario. (Negrillas fuera de texto).

En conclusión, en materia de responsabilidad fiscal de acuerdo con la oportunidad que establece la ley 1474 de 2011, la nulidad por regla general debe proponerse con antelación a la providencia que determine si el procesado es o no responsable fiscalmente; empero, permite de manera excepcional el incidente bajo la óptica de causales que surjan con posterioridad a la decisión, acción que el recurrente no ha realizado.

En virtud de las anteriores disquisiciones, esta Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal, considera que la Solicitud de Nulidad impetrada por el defensor de confianza de la Compañía de Seguros Solidaria de Colombia el doctor Gustavo Alberto Herrera Ávila, es improcedente toda vez que la Contraloría emitió Fallo No. 004 de fecha 20 de junio de 2024, el cual fue notificado personalmente al defensor de confianza el día 25 de junio de 2024 (folio 686 al 688), es decir, el defensor conocía que ya existía un fallo definitivo al momento en que radicó el incidente de nulidad el día 04 de julio de 2024, por lo que se considera que bajo los artículos ya citados queda más que justificada que la petición fue después a la decisión; adicionalmente, de la lectura de la nulidad no se observa la existencia de una causal de nulidad sobreviniente a la emisión de la decisión.

Ahora bien, este Despacho en aras de despejar las dudas de su proceder y pese a que esta solicitud de nulidad es extemporánea e improcedente se permite aclararle al defensor de confianza de la Compañía de Seguros Solidaria de Colombia en calidad de tercero civilmente responsable, que por la causal 3° del artículo 36 de la ley 610 de 2000, es decir, **"la comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso"**, la cual está intrínsecamente relacionada, no le asiste postulación cuando solicita se declare la



Nit. 891.190.246-1

nulidad parcial dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 1148, respecto de la notificación del Auto de Imputación Mixta No. 001 de fecha 26 de febrero de 2024, proferido por este Despacho.

La nulidad presentada pretende desconocer la actuación que realizada por este Despacho el día 20 de junio de 2024, a partir del Fallo Fiscal No. No. 004 de la misma fecha, pretendiendo desconocer que ya se encuentra un fallo definitivo a la situación jurídica del señor de su prohijada la Compañía de Seguros Solidaria de Colombia, el cual fue notificado personalmente al representante de los intereses de la Compañía de Seguros el doctor Gustavo Alberto Herrera Ávila y por lo cual, amerita el rechazo de plano del incidente por extemporáneo e improcedente de conformidad con las consideraciones expuestas.

En ese orden de ideas, esta Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal, considera que la Solicitud de Nulidad radicada por el defensor de confianza de la Compañía de Seguros Solidaria de Colombia, en primer lugar, se presentó de forma extemporánea y por tanto es improcedente, luego no puede después de haberse proferido el fallo fiscal pretender que se conceda la nulidad, y por consiguiente, no será concedida por este Despacho, y por tanto en esta instancia se confirmará el Fallo Fiscal No. 004 de fecha 20 de junio de 2024, dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal Ordinario de única Instancia No. 1148.

Frente al recurso de reposición impetrado por el doctor Gustavo Alberto Herrera Ávila, defensor de confianza de la Compañía de Seguros Solidaria de Colombia, no se pronunciará este Despacho, toda que el mismo se presentó de manera extemporánea de conformidad con la constancia secretarial obrante a folio 690, en la cual se manifiesta:



**DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL
CONSTANCIA SECRETARIAL**

Florencia, 04 de julio del 2024

Referencia: Proceso de Responsabilidad Fiscal N° 1148

Que a última hora hábil de oficina del día 03 de julio del 2024, vencieron en silencio los términos con que disponía la compañía de seguros solidaria de Colombia, para interponer recurso de reposición contra el Fallo Fiscal N° 004 del 20 junio del 2024, notificado el día 25 de junio del 2024.

Pasa al despacho para lo de su competencia.


LIESEL JOULIETH CORREA FORERO
Secretaria



Nit. 891.190.246-1

En tal sentido la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Caquetá,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR todas las pretensiones interpuestas en el recurso de reposición presentado por la defensora de oficio del investigado señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.691.533, en calidad de Alcalde del Municipio de El Paujil, Caquetá; en lo que corresponde decidir a este Despacho.

ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR improcedente la solicitud de Nulidad propuesta por la estudiante de Derecho Luz Marina Moreno Sarabia, quien actúa como defensor de oficio del señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**, por las razones expuestas en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: DECLARAR improcedente la solicitud de Nulidad propuesta el doctor Gustavo Alberto Herrera Ávila, quien actúa en representación de la Compañía de Seguros Solidaria de Colombia, por las razones expuestas en la parte motiva.

ARTÍCULO CUARTO: DECLARAR extemporáneo el recurso de reposición impetrado por el doctor Gustavo Alberto Herrera Ávila, quien actúa en representación de la Compañía de Seguros Solidaria de Colombia, por las razones expuestas en la parte motiva.

ARTÍCULO CUARTO: CONFIRMAR en todas sus partes el Fallo con Responsabilidad Fiscal No. 004 de fecha 20 de junio de 2024, con fundamento en el artículo 53 de la Ley 610 de 2000, de acuerdo con la parte motiva de esta providencia, fallo que fue determinado así:

ARTÍCULO PRIMERO: Fallar Con Responsabilidad Fiscal de conformidad con el Artículo 53 de la Ley 610 de 2000, en la cuantía de **CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE (\$172.510.957) M/CTE.**, dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal de Única Instancia No. 1148, conforme se expresa en la parte motiva de la presente providencia, distribuido de la siguiente manera:

- En contra del señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.691.533 en calidad de Alcalde del Municipio de El Paujil, Caquetá; en cuantía de **CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE (\$172.510.957) M/CTE.**, sobre el valor total del daño.
- En contra del tercero civilmente responsable la compañía de seguros **SOLIDARIA DE COLOMBIA** en cuantía de **NOVENTA MILLONES DE PESOS (\$90.000.000) M/CTE.**, sobre el valor total del daño patrimonial indexado que determinó el presente fallo,



Nit. 891.190.246-1

que afectará la póliza de Seguro Póliza Multirriesgoas No. 630-73-994000000032, sobre el valor total del daño.

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFÍQUESE por estado en cartelera en lugar visible de esta Entidad y en página web institucional conforme lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 1474 de 2011; y comuníquese así:

- 1) Al señor **Rodrigo Andrés Castro Betancourt**, a través de su correo electrónico rodrigoandrescastro@hotmail.com, y a través de su defensora de oficio la estudiante de Derecho Luz Marina Moreno Sanabria, al correo electrónico autorizado luzm.moreno@udla.edu.co (folio 470).
- 2) Al Tercero Civilmente Responsable la Compañía de Seguros Solidaria de Colombia, a través de su defensor de confianza el doctor Gustavo Alberto Herrera Ávila correo electrónico autorizado notificaciones@gha.com.co (folio 729).

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno, teniendo en cuenta que el presente proceso es de única instancia de conformidad con el artículo 110 de la Ley 1474 de 2011.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Una vez notificado el presente Auto, continúese con el trámite y procedimiento en el resuelve del Fallo con Responsabilidad Fiscal No. 004 de fecha 20 de junio de 2024.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE TADEO OYOLA PRIETO
Director Técnico de Responsabilidad Fiscal

	NOMBRE	CARGO	FECHA	FIRMA
Elaboró:	Edgar Medina Pérez	Profesional Universitario	05-07-24	
Revisó:	Jorge Tadeo Oyola Prieto	DTRF		
Aprobó:	Jorge Tadeo Oyola Prieto	DTRF		